



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

Título

La Corte Penal Internacional: enjuiciamiento por crímenes
contra la humanidad en el continente africano

Autor/es

MAKA SYLLA COULIBALY

Director/es

MARIOLA URREA CORRES

Facultad

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Titulación

Grado en Derecho

Departamento

DERECHO

Curso académico

2017-18



La Corte Penal Internacional: enjuiciamiento por crímenes contra la humanidad en el continente africano, de MAKAL SYLLA COULIBALY

(publicada por la Universidad de La Rioja) se difunde bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported.

Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los titulares del copyright.

© El autor, 2018

© Universidad de La Rioja, 2018

publicaciones.unirioja.es

E-mail: publicaciones@unirioja.es

**LA CORTE PENAL INTERNACIONAL: ENJUICIAMIENTO POR CRÍMENES
CONTRA LA HUMANIDAD EN EL CONTINENTE AFRICANO**

**THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: CRIMES AGAINST
HUMANITY VIOLATION IN THE AFRICAN CONTINENT**



**UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA**

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

CURSO 2017-2018

AUTORA:

MAKA SYLLA COULIBALY

TUTORA:

DRA. MARIOLA URREA CORRES

DEPARTAMENTO DE DERECHO

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

RESUMEN: Tras la IIª Guerra Mundial, la Comunidad Internacional se percató asumió la necesidad de crear una instancia internacional competente para juzgar los crímenes más graves cometidos contra la sociedad. Este interés se vio satisfecho con la creación de la Corte Penal Internacional. Una creación que, como resulta fácil de imaginar, no fue fácil, aunque finalmente se logró el establecimiento de una institución permanente e imparcial. A lo largo de este trabajo se analizará la creación de la Corte Penal Internacional, así como, su ámbito de competencia o las formas existentes para los asuntos para el conocimiento de la Corte. El trabajo también incluye el estudio particular de dos procesos ante la CPI y termina con unas conclusiones en las que abordará la preocupación de muchos porque la CPI se pueda convertir en un tribunal contra África.

PALABRAS CLAVE: CPI, genocidio, lesa humanidad, guerra, África, CSNU, resolución, Darfur, Lubanga

ABSTRAT: After WWII, the international community recognised the need of an international instance to judge the most serious crimes against society. For this reason, the International Crime Court was created, not easily, as a permanent and independent institution. The purpose of this dissertation is to analyse the creation of the International Crime Court, its scope of competence, as well as, the existing forms for the affairs of the courts knowledge. This study also includes the particular study of two ICC proceedings and concludes with the numerous concerns that the ICC could become a court against Africa.

KEY WORDS: ICC, genocide, crime against humanity, war, Africa, CSUN, resolution, Darfour, Lubanga.

ABREVIATURAS

Asamblea General (AG)

Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP)

Comisión de Derecho Internacional (CDI)

Consejo de Seguridad Naciones Unidas (CSNU)

Corte Penal Internacional (CPI)

Derecho Penal Internacional (DPI)

Estatuto de Roma (ER)

Fondo Fiduciario a favor de las víctimas (FFV)

Fuerza de Defensa Popular (FDP)

Fuerza Patriótica para la Liberación del Congo (FPLC)

Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MTPI)

Misión Avanzada de las NU en el Sudan (UNAMIS)

Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI)

Movimiento y Ejército de Liberación de Sudan (SLM/A)

Naciones Unidas (NU)

República Democrática del Congo (RDC)

Sala de Apelaciones (SA)

Sala de Cuestiones Preliminares I (SCP)

Tribunal Militar Internacional de Núremberg (TMIN)

Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)

Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia (TPIE)

Unión Africana (UA)

Unión Internacional de Derecho Penal (UIDP)

Unión de Patriotas Congoleños (UPC)

I.INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE HACIA UNA CORTE PENAL INTERNACIONAL

II. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS ANTES DE LA CREACIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.

1. Primeras Aproximaciones a la justicia penal internacional
2. El Tribunal Militar de Núremberg
3. Los Tribunales Penales *Ad Hoc*
 - 3.1. El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia
 - 3.2. El Tribunal Penal Internacional para la Ruanda

III. LA CPI: DEL ESTATUTO DE ROMA A LA CONFERENCIA DE KAMPALA

1. La creación de la CPI: el proceso de elaboración del Estatuto de Roma y su entrada en vigor
 - 1.1. El Proceso de Elaboración del Estatuto de Roma
 - 1.2. La Entrada en Vigor del Estatuto de Roma
2. La competencia de la CPI
 - 2.1. La competencia material, personal, territorial y temporal.
 - 2.2. La Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma: la materialización del crimen de agresión.
3. La activación de los procesos ante la CPI: la legitimación de los Estados, el Fiscal y el Consejo de Seguridad

SEGUNDA PARTE LA APLICACIÓN MATERIAL DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL: ALGUNOS CASOS QUE HAN SIDO CONOCIDOS POR LA CPI

IV. LOS PROCESOS INCOADOS ANTE LA CPI: ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS

V. EL CASO LUBANGA.

1. El contexto: una breve presentación de los hechos
2. El proceso ante la CPI: de la orden de detención a la primera sentencia de la CPI.
 - 2.1. Un proceso marcado por las dilataciones.
 - 2.2. El primer veredicto de la CPI y el derecho a la reparación de las víctimas.

VI. EL CASO SUDAN.

1. El contexto histórico que permite conocer los términos del conflicto
2. El CSNU y su intervención en Sudán

- 2.1. Las primeras actuaciones: las resoluciones y declaraciones del presidente del CSNU.
 - 2.2. La Comisión de Investigación Internacional para la investigación de crímenes en Darfur.
3. El proceso de investigación del Fiscal: las órdenes de detención.
 - 3.1. La primera causa: Ahmad Muhammad Haroun y Ali Muhammad Ali-Abd-Al-Rahman.
 - 3.2. La Segunda Causa: Omar Hassan Ahmad Al Bashir.
 - 3.3. La Tercera Causa: Bahr Idriss Abu Garda.

VII. CONCLUSIONES

VIII. BIBLIOGRAFÍA

ANEXO I

ANEXO II

I.INTRODUCCIÓN.

La regulación de los crímenes internacionales a través de una estructura supranacional y su enjuiciamiento por un tribunal internacional es una práctica un tanto novedosa y excepcional que ha costado años en materializarse. La Comunidad Internacional quién consideró que hay crímenes que merecen un mayor interés por la sociedad. Tales crímenes afectan a la paz y a la seguridad internacional, y son: los Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Genocidio, Crímenes de Guerra y los Crímenes de Agresión.

El interés por la positivación de estos crímenes vino acompañada a su vez por la necesidad de crear una jurisdicción penal internacional, imparcial y con vocación de permanencia capaz de enjuiciar los responsables de estos crímenes. El camino no fue fácil, pero el culmen llegó con la creación de la Corte Penal Internacional (La CPI) en 1998 a través de la Conferencia Diplomática Plenipotenciaria de las Naciones Unidas en Roma. Una Corte que va a ser objeto de estudio en este trabajo desde su creación, viendo su funcionamiento y deteniéndonos en el estudio de algunos casos que ha enjuiciado o están aún enjuiciando.

Antes de analizar la CPI como tribunal internacional es preciso que hagamos mención y analicemos los tribunales internacionales *ad hoc* que han surgido antes de la CPI, los cuales han servido de base y antecedente para la creación de la CPI. De estos tribunales cabe mencionar el Tribunal de Núremberg, el cual fue creado para castigar y no dejar impune las atrocidades cometidas por los nazis contra la comunidad judía durante la Segunda Guerra Mundial; el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia creado el 5 de mayo de 1993 o también el creado para Ruanda el 8 de noviembre de 1994.

Este trabajo se detendrá en el estudio de la CPI desde una perspectiva objetiva profundizando así en los casos relacionados con los países africanos. ¿Y por qué África? la respuesta a esta pregunta no es complicada, ni es considerada un misterio para la Comunidad Internacional. Resulta más bien simple por el hecho de que desde su creación los casos llevados ante esta Corte son de líderes africanos y los países africanos. Esta situación no ha dejado indiferente a los líderes africanos y, en consecuencia los respectivos países se han visto amenazados llegando a considerar que la CPI es una Corte contra ellos. Una afirmación que ha sido el foco de numerosas críticas a la CPI con las declaraciones de líderes africanos e incluso de la propia Unión Africana. Una crítica que ha generado a su vez el anuncio de la retirada de países africanos de la CPI como es el caso de Gambia¹, Burundi (retirada en 2016²) y Sudáfrica³. Incluso Kenia, uno de los mayores defensores de la CPI, aprobó en el 2013 una moción para retirarse de la CPI⁴.

¹ El 25 de octubre de 2016 el gobierno gambiano anuncio su retirada de la CPI por un comunicado del ministro de Información denominando a la Corte como un *tribunal caucásico internacional que sólo está interesado en la persecución y humillación de la gente de color, especialmente los africanos y sus dirigentes*. Pero la decisión fue revocada el 17 de febrero de 2017.

² El 12 de octubre de 2016 el parlamento de burundés voto su salida de la CPI, ello fue notificado el 26 de octubre de 2016 al secretario de las NU a través de una carta oficial. Lo curioso de la retirada es que justo el mes de abril del mismo año la CPI comenzó una investigación en dicho país.

³ El anuncio por parte de Sudáfrica de su retirada de la CPI fue a raíz de la falta de actuación de dicho país con la CPI durante junio de 2015, por no haber arrestado Al Bashir (presidente sudanés) durante la cumbre de la UA celebrada en Johannesburgo. Esta iniciativa tampoco prospero y fue cancelada.

⁴ El caso keniano tiene su origen en marzo de 2010 cuando el Fiscal de la CPI comenzó a investigar los crímenes cometidos durante el conflicto poselectoral de 2007-2008. Por ello, el 5 de septiembre de 2013 el parlamento keniano voto su retirada de la CPI. Esta iniciativa no prosperó.

Con el fin de abordar estas cuestiones, el presente trabajo se dividirá en dos partes: una primera parte sobre la CPI en general; y una segunda parte centrada en la relación entre la CPI y el continente africano. Por último, el trabajo también contará con unas conclusiones relativas a las cuestiones que han suscitado el trabajo.

PRIMERA PARTE
HACIA UNA CORTE PENAL INTERNACIONAL

II. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS ANTES DE LA CREACIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

1. Primeras aproximaciones a la justicia penal internacional.

La existencia de un primer tribunal internacional se remonta a 1474 en Viena, por motivo del enjuiciamiento de Peter Von Hagenbach por crímenes de guerra contra la población civil y la violación de “las leyes de Dios y del hombre”⁵. Este primer juicio internacional fue encausado ante un tribunal de 28 jueces del Sacro Imperio Romano-Germánico. Durante el proceso Peter Von Hagenbach alegó como motivo de exención de la responsabilidad que solo estaba cumpliendo órdenes, una forma de defensa que usarán también más adelante los nazis. Fue el 9 de mayo de 1474 que Pierre de Habenbach fue decapitado.

A raíz de la guerra Franco-Prusiana (1870-71) Gustave Moynier, uno de los fundadores de la Cruz Roja, propuso el 3 de enero de 1872 la creación de un Tribunal Internacional, que sancionaría las violaciones del Convenio de Ginebra de 1864⁶. Así se pretendía renunciar a una represión nacional que no sería tan efectiva como que pudiera generar la represión internacional. Este proyecto que ofrecía una mayor garantía no fue contemplado por los Estados que se negaban a ceder parte de su competencia penal nacional. Sin embargo, todo este trabajo influyó más tarde a la Unión Internacional de Derecho Penal (U.I.D. P⁷) fundada en 1889 y rebautizada en 1924 como Asociación Internacional de Derecho Penal (A.I.D. P⁸), que en 1926 solicitó la creación de una Corte Penal Internacional.

Después de la 1ª Guerra Mundial y de sus consecuencias devastadoras había una conciencia de justicia postconflicto. Por ello, el tratado de Versalles en su artículo 227⁹ estableció la creación de un Tribunal especial para juzgar al exemperador alemán, Guillermo II de Hohenzollern acusado de la violación de la moral internacional y la autoridad sagrada de los tratados. Un tribunal que estaría formado por 5 jueces nombrados por las potencias vencedoras: los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón. Pero, el proceso no pudo tener lugar debido a que el gobierno de los Países Bajos se negó a la extradición alegando por una parte que ellos no formaban parte del tratado de Versalles, que los hechos de los que se les acusa a Guillermo no son delito en Holanda y porque los monarcas europeos se habían opuesto a este enjuiciamiento. Como declara el

⁵ Hernando VALENCIA VILLA. “Hacia una Jurisdicción Penal Internacional”. *Revista de pensamiento Iberoamericano*, núm 2. 2001, pp. 197-213.

⁶ Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864 para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña.

⁷ La Unión Internacional de Derecho Penal fue fundado en Viena en 1889 por tres penalistas muy importantes: Franz Von Liszt, Gérard Van Hamel y Adolphe Prins y se disolvió después de la Primera Guerra Mundial.

⁸ La página oficial de la AIDP: <http://www.penal.org/es/node/167>

⁹ El artículo 227 del Tratado de Versalles “*Las Potencias aliadas o asociadas acusan públicamente a Guillermo II de Hohenzollern, es Emperador de Alemania, por ofensa suprema contra la moral internacional y la autoridad sagrada de los Tratados. Un Tribunal especial se constituirá para juzgar el acusado, ...*”

profesor Cherif Bassiouni¹⁰ parece claro que los aliados no estaban preparados para crear un precedente con la persecución de un jefe de estado sobre la base de una nueva incriminación internacional¹¹.

2. El Tribunal Militar Internacional de Núremberg (TMIN)

El Tribunal de Núremberg¹² fue el primer Tribunal Internacional *ad hoc* junto con el de Tokio¹³ creado con el objetivo de enjuiciar los principales crímenes cometidos por los grandes líderes nazis de la masacre judía. En su creación por medio del Acuerdo de Londres del 8 de agosto de 1945 participaron Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda del Norte, Francia y la Unión Soviética.

El juicio comenzó el 20 de noviembre de 1945 y terminó el 31 de agosto de 1946. El Tribunal dictó sentencia el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1946. Las sentencias se hicieron efectivas finalmente el 16 de octubre de 1946. Se procesaron 24 líderes nazis y 6 organizaciones¹⁴, a los cuales se les imputaban los cargos de conjura, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La acusación estaba formada por fiscales principales provenientes y nombrados por los 4 Estados vencedores. Por lo que se refiere a la jurisdicción está formada por jueces de los Estados vencedores. A la hora del proceso, de los 24 individuos comparecieron ante el Tribunal 21 debido a que Robert Ley, el jefe del Frente Alemán del Trabajo, se había suicidado y Gustav Krupp von Bohlen Halbach, presidente del consorcio de los Krupp, fue declarado senil.

El TMIN es un tribunal que influyó a en los sucesivos tribunales *ad hoc* que se van a crear y en la actual CPI. Aunque también hay que admitir que se ha visto sumido en numerosas críticas. Así, en un primer momento se ha considerado que era un “tribunal para los vencedores” sin garantías, también que era un tribunal compuesto solamente por representantes de las cuatro potencias aliadas vencedoras; y en un segundo momento, se ha entendido que la pena de muerte establecida como pena máxima resultaba *a posteriori* contradictoria con los principios fundamentales, que deben primar en la justicia internacional.

3. Los Tribunales Penales Ad Hoc

3.1 El Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia (TPIE)

¹⁰ El profesor Cherif Bassiouni fue un jurista egipcio, considerado como el padre del DPI al ser uno de los mayores expertos del mundo en la justicia internacional. Fue uno de los partidarios de la creación de la CPI y su labor fue trascendente en el momento de su creación.

¹¹ Véase, Philippe GRECIANO et BASSIOUNI M. Cherif *Justice Pénale Internationale. Les nouveaux enjeux de Nuremberg à La Haye*, Paris, Mare & Martin, 2016 p. 30.

¹² Jaime Alberto SANDOVAL MESA. “El desarrollo. de la competencia internacional. primeros aportes desde Núremberg y Tokio”, *Revista Prolegómenos - Derechos y Valores*, vol. I, 2012, pp. 35-55.

¹³ El Tribunal Militar Internacional *ad hoc* para el Lejano Oriente creada en Tokio el 19 de enero de 1946 por el General Douglas MacArthur. Fue un tribunal que se basó en el modelo de Nuremberg, estaba compuesto por 11 jueces que debían emprender un juicio rápido y justo para castigar a los criminales de guerra del Extremo Oriente.

¹⁴ Organizaciones como el Gobierno del Reich, el Alto Mando de las Wehrmacht, la SS, las SA y la Gestapo.

El 25 de mayo de 1993 las resoluciones 808¹⁵ y 827¹⁶ del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (CSNU) crearon el Tribunal *ad hoc* para la Ex Yugoslavia con el fin último de enjuiciar y no dejar impune los crímenes contra la humanidad cometidos en los Balcanes, sin importar el cargo de los responsables.

En estas resoluciones el CSNU se hace referencia a las resoluciones precedentes como la resolución 780 de 6 de octubre de 1992¹⁷, donde se le expone al Secretario General la necesidad de establecer una comisión de expertos encargados de la investigación. Con las investigaciones de los expertos, las informaciones provenientes de la propia Comunidad Europea o de juristas franceses o italianos, el CSNU concluyó que la situación en este territorio era “*una amenaza para la paz y la seguridad internacional*”. Por ello, invocando el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas el CSNU determina la creación de este tribunal.

El Tribunal estaba compuesto por 11 magistrados de distintos Estados, el Tribunal tenía una jurisdicción *ratione loci* para los crímenes cometidos en el territorio de la Ex Yugoslavia¹⁸, una competencia *ratio temporis* para los crímenes cometidos desde el 1 de enero de 1991. El derecho aplicable eran las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949¹⁹, relativas a normas de derecho internacional humanitario y que incluyen normas de Derecho Internacional Consuetudinario aplicables a conflictos armados internacionales; Convención de la Haya de 1907; la Convención del 9 de diciembre de 1948 para la prevención y represión del crimen de Genocidio; y el Estatuto del Tribunal de Nuremberg.

El Tribunal para la Ex Yugoslavia dio por finalizado su trabajo, el 31 de diciembre de 2017. El Tribunal ha conocido de casos que afectaron a 161 personas. De todos ellos 90 fueron condenados, 19 absueltos, 13 fueron enviados a un Tribunal de jurisdicción nacional, 20 acusaciones fueron retiradas, 17 de ellos murieron y 2 de ellos tuvieron un nuevo proceso delante del Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MTPI²⁰).

3.2. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)

Segundo tribunal *ad hoc* establecido por el CSNU por medio de la Resolución 955 del 8 de noviembre de 1994²¹. Con ello el CSNU quería disponer de un mecanismo que

¹⁵ Resolución del Consejo de Seguridad 808 (1993) de 22 de febrero. Véase en [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/808%20\(1993\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/808%20(1993))

¹⁶ Resolución del Consejo de Seguridad 827 (1993) de 25 de mayo. Véase en [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/827%20\(1993\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/827%20(1993))

¹⁷ Resolución del Consejo de Seguridad 780 (1992) de 6 de octubre. Véase en [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/780%20\(1992\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/780%20(1992))

¹⁸ Jeannette IRIGOIN BARRENNE. “El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas”. *Revista Chilena de Derecho Número especial*, 1998 pp. 395-400

¹⁹ El artículo 2 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Violaciones graves de los Convenios de Ginebra 1949.

²⁰ MTPI: mecanismo creado por el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas 22 de diciembre de 2010. Tiene una vocación temporal y se encarga de algunas de los enjuiciamientos y recursos de los Tribunales Penales para la Ex Yugoslavia y Ruanda durante y después de sus cierres

²¹ Resolución 955 del Consejo de Seguridad (1994) de 8 de noviembre. Véase en [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/955%20\(1994\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/955%20(1994))

permitiera enjuiciar a los principales responsables del genocidio ruandés y de otros delitos.

Al tener este tribunal como antecedente el TPIEX su creación y modo de operar fue similar a dicho Tribunal con la actuación desde el comienzo de una Comisión de Expertos para investigar las violaciones del Derecho Internacional Humanitario. A raíz de dicha investigación el CSNU acabó concluyendo que la grave situación constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacional, a pesar de ser un conflicto interno. Fue un conflicto interno que generó la movilización de un gran número de refugiados en los países vecinos.

El CSNU decidió que la competencia *ratio temporis* del tribunal se comenzará a partir del 1 de enero de 1994, a pesar de que las graves tensiones comenzaron en 1990. A diferencia del TPIEX el TPIR cerró definitivamente sus puertas el 31 de diciembre de 2015. En su labor el TPIR consiguió la imputación de 93 personas, de los cuales 85 fueron procesados y juzgados, y 8 personas fugitivos.

III. LA CPI: DEL ESTATUTO DE ROMA A LA CONFERENCIA DE KAMPALA

1. La creación de la CPI: el Proceso de Elaboración del Estatuto de Roma y su Entrada en Vigor.

1.1. El Proceso de Elaboración del Estatuto de Roma

La creación de una jurisdicción internacional no fue nada fácil. Durante el proceso se presenciaron numerosas iniciativas y largas interrupciones por el contexto histórico y la falta de entendimiento entre los distintos actores internacionales. A pesar de todos los obstáculos siempre se mantuvo la intención de crear una instancia jurisdiccional internacional propia y de carácter permanente capaz de juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz.

Después del antecedente del Tribunal de Nuremberg, la Asamblea de General (AG) de las Naciones Unidas comenzó a reflexionar en 1947 en la elaboración de un código que recogiera los diferentes crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad²². Un año después, en 1948, la Asamblea pidió a la Comisión de Derecho Internacional (CDI)²³ la posibilidad crear una sala de lo penal en la Corte Internacional de Justicia (CIJ)²⁴. Otro hito que apoyó el auge de esta idea fue que los redactores de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio del 10 de diciembre de 1948, habían previsto en el artículo 6²⁵ de la Convención una jurisdicción criminal internacional, en donde serían juzgados los responsables de crímenes de genocidio. En 1954 la AG planteó

²² Véase, William BOURDON, Emmanuelle DUVERGER y Robert BADINTER *La Cour pénale internationale. Le statut de Rome*. Paris, Inédit Essais, 2000, p.18.

²³ La Comisión de Derecho Internacional (CDI): comisión creada el 21 de noviembre de 1947 por la Asamblea de las Naciones Unidas por la resolución A/RES/174(II), que tenía por objetivo el desarrollo y la codificación del derecho internacional. Compuesto con 34 miembros elegidos por un periodo de 5 años.

²⁴ Corte Internacional de Justicia (CIJ): es el órgano judicial por excelencia de la UN, que tiene como misión resolver los conflictos propuestos por los Estados y emitir dictámenes clarificando cuestiones jurídicas.

²⁵ Artículo 6 de la Convención: “*Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el artículo III, serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción*”

la creación de un código que recogieran los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. Fue la CDI quien llegó a aprobar este proyecto, el cual no llegó a prosperar por el desacuerdo de los Estados en ciertas cuestiones relativa a la noción del delito de agresión.

Estas primeras aproximaciones no llegaron a buen término, sobre todo debido al contexto político social del momento con el período de la Guerra Fría. La cuestión vuelve a surgir en 1973 con *La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid* cuyo articulado 5 establecía la posibilidad de llevar a los acusados ante un Tribunal Penal²⁶.

En 1980 la AG intentó volver a poner en juego el trabajo de la CDI, en esta ocasión es preciso destacar el impulso generado por un grupo de expertos de ONG presidido por el profesor Cherif Bassiouni. La CDI aprueba en 1994 un proyecto de estatuto, recomendando a su vez a la AG de las NU la organización de una conferencia internacional para establecer así una convención relativa a la creación de una jurisdicción penal internacional. Este nuevo avance se debe sobre todo al fin de la Guerra Fría, cuyo fin permitió un acercamiento estrecho entre las potencias capitalistas y las potencias de regímenes comunistas. Además, la creación del TPIEX (1993) y el TPIR (1994) afloró el interés de la Comunidad Internacional a la creación de una jurisdicción penal internacional.

En 1995 la AG creó una Comisión encargada de preparar un texto para la adopción de una Convención Internacional. Entre marzo de 1996 y marzo de 1998 tuvieron lugar 6 comités preparatorios en Nueva York, en los que las ONG tuvieron una gran labor de colaboración con los distintos representantes de los Estados. En estas largas discusiones y debates hubo Estados que no estaban dispuestos a ceder parte de su soberanía como el caso de los Estados Unidos. Otros no eran muy partidarios de la creación de una jurisdicción internacional que pudiera enjuiciar sus actos criminales (China), la cual voto en contra). Pero también había un tercer grupo de Estados, que eran sobre todo pequeños (como Andorra), que presionaron a favor de la creación de este Tribunal.

En definitiva, las causas que dificultaron una rápida adopción de un acuerdo común fueron en primer lugar que los Estados tenían un recelo a ceder parte de su soberanía a una jurisdicción supranacional. En segundo, la falta de una cohesión entre los Estados. En tercer lugar, la resistencia a asumir elevados costes económicos para el establecimiento, desarrollo y mantenimiento de esta jurisdicción.

Estas arduas reuniones finalizaron con la Conferencia Diplomática de Roma de 1998²⁷ en el marco de la cual se adoptó el Estatuto de la Corte Penal Internacional el 17 de Julio de 1998. La Conferencia diplomática contó con la participación de 160 Estados y la presencia de 260 ONG que fueron meros observadores. La actuación de las ONG fue imprescindible²⁸, los cuales crearon en 1995 una Coalición por la Corte Penal

²⁶ Artículo 5: “*Las personas acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención podrán ser juzgadas por un tribunal competente de cualquier Estado Parte en la Convención que tenga jurisdicción sobre esas personas, o por cualquier tribunal penal internacional que sea competente respecto a los Estados Partes que hayan reconocido su jurisdicción*”

²⁷ Esta conferencia consistió en una conferencia diplomática plenipotenciaria de las NU. Fue acordada a través de una resolución de la AN de las UN, la Resolución 51/207 del 17 de diciembre de 1996. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/761/48/PDF/N9776148.pdf?OpenElement>

²⁸ Juli MINOVES-TRIQUILL. “ONG y pequeños estados en el establecimiento y consolidación de la CPI”.

Internacional²⁹. Una labor imprescindible gracias a su autonomía, capacidad para recoger datos, la elaboración de propuestas, el incremento de las denuncias se logró la cohesión entre los distintos Estados.

1.2. La Entrada en vigor del Estatuto de Roma

La Conferencia Diplomática Plenipotenciaria de las Naciones Unidas en Roma tuvo lugar entre el 15 de junio y el 17 de julio de 1998. Después de largas e intensas deliberaciones el Estatuto acabó adoptándose con la votación favorable de 120 gobiernos, 7 países votaron en contra de su adopción (Estados Unidos, China, Israel, Irak, Libia, Qatar y Yemen) y 21 se abstuvieron.

Este difícil proceso hacia el establecimiento de la CPI no concluiría hasta garantizar su entrada en vigor para lo cual era necesario que 60 Estados hubieran depositado su instrumento de ratificación (artículo 126 del Estatuto de Roma³⁰). Los 6 primeros países depositaron su instrumento de ratificación en 1999 (Senegal, Trinidad y Tobago, San Marín, Fiyi, Ghana e Italia). Pero no todos los Estados estaban a favor desde un principio. De estos países es preciso hacer un paréntesis sobre las actuaciones del gobierno estadounidense para impedir la adopción del Estatuto. En un primer momento durante las negociaciones tuvo una actuación activa solicitando la modificación o inclusión de artículos contrarios a sus intereses. En segundo lugar, estaba en contra de la ratificación, por ello llevó a cabo una campaña *anti-CPI*. Esta negativa le llevó incluso a amenazar a los países que estaban a favor y que eran firmantes, con suspender su apoyo financiero y militar³¹. A pesar de todo ello, los países apoyaron la CPI rechazando así el chantaje ejercido. Con el paso de los años aún sigue la negativa estadounidense de querer aceptar esta jurisdicción nacional. Con todo, el 5 de febrero de 2009 presenciamos un ligero acercamiento cuando Barack Obama apoyó públicamente la detención del presidente sudanés³².

Revista CIDOB d'Afers Internacionals n.101, pp. 177-193

²⁹ La Coalición por la Corte Penal Internacional: coalición creada en 1995 por un grupo de 25 ONG con el fin de promover una campaña a favor de la creación de una Corte Penal Internacional. La coalición ha evolucionado hasta contar con unos 2500 miembros.

³⁰ Art.126.ER “Entrada en vigor 1. El presente Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el presente Estatuto o se adhiera a él después de que sea depositado el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión”

³¹ Información de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una organización intergubernamental que agrupa 184 organizaciones de 112 países, que desde 1992 está comprometida por la defensa de los Derechos Humanos en su conjunto. N.º 516e, marzo 2009-diciembre 2009” Estas iniciativas se basaban en una ley norteamericana adoptada para con este propósito, llamada *American Service Members Protection Act (ASPA; conocida también con el nombre de Hague Invasion Act)*, que prohíbe cualquier tipo de cooperación de los Estados Unidos con la Corte “

³² La Federación Internacional de Derechos Humanos. “CPI: los primeros años de la Corte Penal Internacional”. N.º 516 marzo 2009-diciembre 2009, p.6.
<https://www.fidh.org/IMG/pdf/NoteCPI516esp2009-2.pdf>

El 1 de julio de 2002 el Estatuto de Roma para una Corte Penal Internacional entró finalmente en vigor el 11 de abril de 2002 gracias al depósito simultáneo de los instrumentos de ratificación de 10 países³³. En la actualidad los Estados partes son 123: 28 Estados Americanos y del Caribe, 25 Estados de Europa occidental, 18 Estados de Europa Oriental, 19 Estados del Pacífico y Asia, 33 estados³⁴ del continente africano.

2. La Competencia de la CPI

2.1. La competencia material, personal, territorial y temporal

La CPI podrá ejercer su jurisdicción atendiendo a los criterios de competencia que le ha sido asignado. Así, que es una jurisdicción que no tiene competencia universal y que ve limitado su ámbito de actuación. Por ello la Corte debe tener en cuenta 4 ámbitos de competencia: la material, personal, territorial y temporal.

Antes de analizar estos ámbitos es necesario que realicemos algunas menciones al principio sobre el que se sostiene esta jurisdicción: el principio de complementariedad. Es un principio muy importante que viene mencionado en el preámbulo y el art.1.ER. El principio de complementariedad implica una relación de subsidiariedad entre las jurisdicciones nacionales y la de la Corte, de esta forma la Corte se encargará de la investigación de los hechos y el posterior juicio solo cuando los tribunales nacionales no quieran ejercerla. Por lo tanto, la competencia de la CPI regirá ante falta de voluntad y cierta incapacidad de actuación de las autoridades nacionales ante una situación que amenaza la estabilidad de la comunidad internacional.

2.1.1. Competencia material o *ratione materiae*

En el art.5.ER se regulan los crímenes relativos a la competencia de la Corte. El precepto detalla los crímenes, de transcendencia para la Comunidad Internacional, que afectan gravemente a los principios y objetivos de la ONU y que van en contra de la moral humana. Estos crímenes son los crímenes de Genocidio, Lesa Humanidad, Guerra y Agresión.

A diferencia del proyecto de la CDI, donde se plasmaba una competencia universal para la CPI, el Estatuto estableció una competencia taxativa fruto del consenso, donde están excluidos los crímenes relativos al narcotráfico y terrorismo internacional. Pero esta regulación no debemos interpretarla de manera estricta porque, en primer lugar, como el propio Estatuto plantea, es posible la modificación después de 7 años desde su entrada en vigor, convocando una Conferencia de Revisión por parte del Secretario General de las NU. En segundo lugar, no hay que olvidarse del Derecho Internacional Consuetudinario y los Principios Generales del Derecho que pueden llegar a completarlo o a generar

³³ Los países que depositaron sus instrumentos de ratificación de forma simultánea: Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Camboya, República Democrática del Congo, Irlanda, Jordania, Mongolia, Níger, Rumania y Eslovaquia.

³⁴ Web oficial de la Asamblea de Estados Partes en la que se encuentra esta información: https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx

nuevas normas consuetudinarias, después de todo estos crímenes también son resultado del Derecho Internacional Consuetudinario.

A continuación, detallamos los distintos tipos penales que configuran la competencia material de la CPI:

a) Crímenes de Genocidio (art.6.ER.)

La palabra Genocidio viene del griego *genos*, que significa clan o tribu y de la palabra latina *caedera*, que quiere decir masacrar. Es un término que fue primeramente utilizado por Raphaël Lemkin³⁵, dotándole a su vez de una definición. Para Lemkin el Genocidio consta de dos fases: una primera fase de destrucción de un grupo étnico oprimido y una segunda fase de opresión ejercida por un grupo dominante que pretende eliminar ese grupo étnico en su totalidad. Fue una concepción utilizada en numerosas ocasiones en el TMIN por los fiscales y con el paso del tiempo fue evolucionando. Una evolución que culminó con la Convención de las NU del 9 de diciembre de 1948 para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio.

El art.6.ER. se limita a la reproducción de la noción normalizada en el Convención de 1948. De conformidad con este precepto se va a proteger a cualquier grupo nacional, étnico, racial o religioso que hayan sufrido violencias o abusos cometidos con el fin de destruirlos en parte o en su totalidad. El delito de genocidio tiene como objetivo castigar toda acción criminal que afecte a la existencia de un determinado grupo sin tener en consideración el móvil, que es totalmente irrelevante. Esto quiere decir que no se va a tener en cuenta si el acto fue perpetuado por motivos racistas, económicos, xenófobos, políticos o por venganza. Como se viene explicando lo que la protección buscada con la regulación de este tipo penal es proteger la existencia de un grupo en concreto, protección desde un principio supraindividual. Es decir, que es una protección que va más allá de la persona física como individuo.

Para que haya consumación de este tipo penal no es necesario el daño a un gran número de individuos pertenecientes al grupo en cuestión, sino que basta con el homicidio de un miembro del grupo, al que se quiere exterminar, para la perfección de este crimen³⁶. Pero esto será efectivo siempre y cuando en el acto cometido preexista la intención de destrucción o exterminio del grupo nacional, étnico, racial o religioso. Además, es un acto criminal que suele estar integrado en un plan previo ideado por un poder político, un plan que es ejecutado por numerosos individuos como sucedió con el genocidio armenio por el pueblo Otomano y el genocidio de los judíos.

El delito de genocidio no contempla solamente la destrucción física de un grupo, sino que también es posible un genocidio biológico y cultural. En primer lugar, con la destrucción física se refiere al genocidio físico, un crimen integrado por comportamientos de asesinato, de agresión sexual o no sexual por parte del sujeto activo. El segundo lugar, el

³⁵ Raphaël Lemkin fue un jurista de origen polaco de ascendencia judía, que perdió 49 miembros de su familia en el holocausto. En su libro *Axis Rule in Occupied Europe* publicado en 1944 introdujo su noción de Genocidio.

Xabier IRUJO. “Genocidio”. *Hermes: pentsamendu eta historia aldizkaria = revista de pensamiento e historia*, ISSN 1578-0058, Nº. 52, 2016 (Ejemplar dedicado a: Memoria bizirik), pp. 22-28

³⁶ Así lo afirma, entre otros, Alicia GIL GIL en “Los Crímenes contra la Humanidad y el Genocidio en el Estatuto de la Corte Penal Internacional”. *La nueva justicia penal internacional: desarrollos post-Roma*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002 p.31.
<http://www.cienciaspenales.net/files/2016/10/1loscrimenescontralahumanidadyelgenocidio.pdf>

genocidio biológico³⁷ consiste en el exterminio de un grupo impidiendo así su futura reproducción a través de numerosos métodos y mecanismos (la esterilización o la imposición del aborto). El tercero lugar, el genocidio cultural por su parte consiste en la desaparición de las características culturales de una comunidad por medio del sometimiento de forzoso de esta masa a prácticas o comportamientos contrarios a su cultura o religión (la destrucción de monumentos, prohibición de la de utilizar la lengua propia de la comunidad, obligar a comer cerdo...)

El art.2 de la Convención de 1948 y su reproducción en el precepto 6 del Estatuto clarifican que la pretensión de destrucción del sujeto activo puede ser con propósito de destrucción total o parcial. Además, el ámbito de protección relativo al bien jurídico protegido se ve limitado a los grupos nacionales, étnicos, religiosos o nacionales. Vemos así una exclusión implícita de otros grupos existentes en la comunidad internacional como son los grupos sociales y políticos.

Los actos criminales que son contemplados en este tipo delictivo son la matanza, las lesiones corporales y mentales, impedimentos de nacimientos y los traslados forzosos de niños lejos de su grupo de pertenencia.

- El acto de matanza consiste en dar muerte a una o varias personas físicas integrantes de una comunidad.
- Las lesiones a la integridad física o mental son las relativas a todo tipo de actos de tortura, violaciones, violación sexual o tratos inhumanos degradantes. Estos actos no son un *numerus clausus*, sino que pueden integrar este tipo de lesiones otros actos relacionados.
- Los actos que impedían el nacimiento de descendientes es el claro reflejo del genocidio biológico del que hablábamos con anterioridad.
- Los traslados forzosos de niños lejos de su grupo de pertenencia, es la relativa al genocidio cultural.

Todas estas modalidades de comisión del delito de genocidio, requiere a su vez dos comportamientos del sujeto activo: en primer lugar el dolo, lo cual basta con cualquier tipo de dolo³⁸; y en segundo lugar la intención de exterminar una comunidad concreta, esta intención a su vez debe incorporar la conciencia y la voluntad.

b) Crímenes de Lesa Humanidad (art.7.ER)

Un crimen que fue regulado y definido por primera vez en el art.6.c del Estatuto del TMIN, más tarde en el Estatuto del Tribunal de Tokio, en el TPIY y el TPIR. En la actualidad está regulado por el art.7 del Estatuto, donde se profundiza en la definición y las condiciones necesarias para su existencia.

El artículo consta de 3 partes: una primera parte referida a una especie de preámbulo, una segunda parte que consiste en una profundización sobre los crímenes de lesa humanidad, y una tercera parte que define el término género. La redacción y estructura del artículo es *a priori* similar a los proporcionados por los Estatutos del TPIY (art.5) y del TPIR (art.3), pero a la luz de su lectura hay una diferencia clara dado que en su preámbulo se establecen los requisitos que deben cumplir los actos para considerarse como tal, así:

³⁸ Tipos de dolo: dolo directo o de primer grado; dolo indirecto o de segundo grado; dolo eventual.

“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por <<crimen de lesa humanidad>> cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”

Lo característico y novedoso de este articulado está en que para que exista un crimen de lesa humanidad no es necesario que el acto criminal sea consecuencia de un conflicto armado. La independencia entre la guerra y el crimen de lesa humanidad tiene su origen en el propio concepto de este crimen. Dejando atrás esta ambigüedad, la doctrina ha abogado por el nacimiento de nuevos conceptos ajenos e independientes de los conflictos bélicos. Tampoco se requiere una intención discriminatoria, esto es, la comisión por motivos políticos, nacionales, filosóficos, étnicos, sociales, religioso o por cualquier otro motivo relacionado.

Según el encabezado, el ataque tiene que ser generalizado y sistemático³⁹. El primer aspecto se refiere a una exigencia cuantitativa, es decir, que tiene que ser un ataque que afecte a un gran número de víctimas. El segundo aspecto menciona un criterio cualitativo, es decir, que el ataque ha de ser resultado de un comportamiento metódico y planeado⁴⁰. El ataque generalizado debe ser demostrado y constituir un elemento material del crimen de lesa humanidad.

Además de estos dos elementos, es necesario un tercero que viene mencionado en el párrafo 2 del artículo, un elemento político, esto es que el crimen sea respuesta de una política estatal o de una organización. El TMIN había proporcionado una interpretación restrictiva y rechazando la teoría del complot, pero las jurisdicciones internacionales posteriores incluida la CPI han considerado que el crimen de lesa humanidad acarrea un componente previamente planificado. Este se traduce en que el acto criminal conlleva un cálculo, premeditación política, ideológica o dogmático. En una concepción tradicional el ataque político perseguido era la de un Estado como sucedió con el TMIN, pero esta interpretación era más bien restrictiva al no considerarse otros actores distintos a los gubernamentales. La incorporación de nuevos sujetos activos se manifestó en el proyecto de código de la CDI. El ER incluye el ataque propiciado por una organización, no obstante, no nos llega a precisar las características de este nuevo sujeto activo. No va ser hasta 2010, por motivo de una decisión de la sala preliminar de la Corte sobre la situación en la República de Kenia⁴¹, que se nos va a proporcionar una serie de criterios para calificar la organización⁴²:

- Que el grupo tenga una autoridad responsable o que haya establecido una jerarquía.
- Que tenga la posibilidad de realizar un ataque generalizado y sistemático.
- Que el grupo controle parte del territorio del Estado.
- Que el grupo tenga como objetivo atacar una población civil.

³⁹ Julio VIVES CHILLIDA. “La evolución jurídica internacional de los crímenes contra la humanidad”. *Curso de derecho internacional y relaciones internacionales de Victoria-Gateiz*, 2003.

⁴⁰ Kai Ambos. “Crímenes de Lesa Humanidad y la Corte Penal Internacional”. *Revista General de Derecho Penal* 17, 2012, pp.1-30.

⁴¹ Véase, sobre la direction de Herve Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet. *Droit International Pénal*; Cedin, Paris, 2012. Mario Bettati, Titre 1 : *Les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité*, p. 112.

⁴² Criterios tomados de la decisión de Sala preliminar II de la CPI sobre la situación en Kenia, ICC-01-09, 31 de marzo de 2010 https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_03256.PDF

- Que el grupo manifieste explícitamente su intención de atacar una población civil.
- Que el grupo pertenezca a un grupo más amplio que cumpla algunos o todos los criterios precedentes

Sobre la identidad de estos sujetos activos la doctrina se encuentra dividida. Así están los que defienden que no es preciso un sujeto activo especial, sino que el delito puede ser cometido por personas privadas. Por otra parte, están los que aboga por la intervención como sujeto activo el poder político⁴³. Para Alicia Gil Gil⁴⁴ la solución es adoptar una posición más bien intermedia entre estas dos teorías, pero esta solución implica en relación con los sujetos privados la existencia de elementos internacionales en su actuación. En definitiva, este tercer elemento tiene una interpretación un tanto amplia al englobar aquí las conductas activas, la inacción deliberada estatal y la tolerancia de las atrocidades.

También, se debe tener en cuenta un cuarto elemento que es que el ataque afecte a la población civil, esta expresión proviene del derecho humanitario y sirviéndose de la definición del Protocolo I de los Convenios de Ginebra (1949⁴⁵). Este término de población civil engloba todo tipo de personas no miembros de las fuerzas armadas. La noción evidencia una exclusión de los combatientes. La Corte aún no se ha pronunciado sobre la ampliación de esta concepción a los combatientes. Por último, el elemento psicológico o moral de la infracción, es decir, la intención del autor del acto es determinante en la calificación del crimen de lesa humanidad. El acusado tiene que tener un conocimiento doble del ataque: este conocimiento requiere por un lado que el individuo tenga consciencia de la existencia del ataque; y por otro que tiene que percatarse de que su actuación individual está incluida en el ataque colectivo.

Con el análisis de los elementos del crimen de lesa humanidad, es preciso interrogarse en último lugar por los actos inhumanos que vamos a englobar en este tipo delictivo. En el Estatuto del TMIN se enumeró una lista de 5 actos: el asesinato, la exterminación, la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos⁴⁶. El Estatuto del TPIR integra otros actos como: la expulsión, el encarcelamiento, la tortura y la violación. Finalmente es el ER quien viene a completar la lista de actos inhumanos, quedando así integrada en este tipo delictivo los actos de: *muerte; la exterminación; la esclavitud; la deportación o traslado forzado de la población; el encarcelamiento; la tortura; la violación, la esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; la desaparición*

⁴³ Véase, Alicia GIL GIL “Los crímenes contra la humanidad y el genocidio en el estatuto de la corte penal internacional”. Pies de página 49 y 50.

⁴⁴ Pie de pág 43.

⁴⁵ Es el capítulo II de la Sección I del título IV que nos da una noción de población civil y regula protección de esta población civil. <https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977#POBLACION-CIVIL>

⁴⁶ El artículo 6 del Estatuto del TMIN : “ ... c) *CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD: A saber, el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crimen es que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna de país donde se perpetraron*” http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1852538/estatuto_del_tribunal_de_nuremberg.pdf/20090fa2-e5bf-447a-aa96-612403df2a66

*forzada; el crimen de apartheid; y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física*⁴⁷.

c) Crímenes de Guerra (art.8.ER)

Los crímenes de guerra antes de regularse en el art.8 del Estatuto como los precedentes fue reconocido con anterioridad en el Reglamento del IV Convenio de la Haya de 1907 relativo a las leyes y usos de la guerra terrestre; en los Convenios de Ginebra de 1929 sobre el trato a los prisioneros de guerra; en las 4 Convenciones de Ginebra de 1949; y también en el Estatuto del TMIN, TPIY y TPIR. En estos últimos la novedad fue la ampliación y sistematización del concepto por la inclusión a este delito de los conflictos armados internos.

El crimen de guerra implica todo acto dirigido a la violación del *ius in bello*, esto es la violación de las leyes y costumbres de la guerra de una gravedad particular. Según nos dicen George y Rosemary Abi-Saab para que la violación de las leyes y costumbres de la guerra pueda comprometer la responsabilidad penal de un individuo, además de demostrar la existencia de la norma violada es preciso un segundo elemento consuetudinario⁴⁸.

La CPI conocerá de todo tipo de crímenes de guerra, pero siempre y cuando “...se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes”, por lo tanto, nos encontramos ante una limitación de la competencia de la CPI. Para que un acto criminal tenga la calificación de crimen de guerra es imprescindible: que exista un conflicto armado, la simple existencia del conflicto armado conlleva la aplicación de la noción de crimen de guerra *in abstracto*; y que ese conflicto armado se; o bien un conflicto armado internacional, o un conflicto armado no internacional.

Históricamente se ha entendido que este tipo de crímenes se aplicaba solamente en el ámbito de los conflictos armados internacionales, considerando así que los conflictos civiles estaban excluidos. Esta consideración cambió con el art.3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, donde los conflictos internos encuentran cabida a nivel internacional. Una protección que va a estar limitada y no va a ser absoluta como en el ámbito internacional debido a que ciertos actos criminales en los conflictos internacionales no tienen cabida en los conflictos internos. El ER va a distinguir entonces dos escenarios posibles a este crimen: un primer escenario referido a los conflictos armados internacionales entre los Estados; y un segundo escenario referido a los conflictos internos, que es el enfrentamiento entre la Fuerzas Armadas Estatales y los grupos disidentes o rebeldes pertenecientes a este Estado. Pero la práctica jurisprudencial ha demostrado que es posible la existencia de los conflictos armados mixtos, es decir, conflictos con elementos internacionales e internos. Esto último puede ocurrir cuando un

⁴⁷ Párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma [http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute\(s\).pdf](http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf)

⁴⁸ Véase, sobre la direction de Herve Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet. *Droit International Pénal* ; Cedin, Paris, 2012. Capitula 10, George y Rosemary Abi-Saab, p. 152 : « *pour que la violation d'une règle du jus in bello ait l'effet spécial d'engager la responsabilité pénale individuelle, il faut établir non seulement l'existence de la règle violée en droit international, mais également l'existence d'une règle secondaire, normalement coutumière, qui attribue à la règle cet effet spécial* »

grupo rebelde del Estado en conflicto está apoyado directa o indirectamente por otro Estado u otros Estados.

Los conflictos armados internacionales contemplan tres situaciones distintas. La primera se refiere a los conflictos entre Estados soberanos (art.2 común de los cuatro convenios de ginebra, 12 agosto de 1949), la declaración de guerra ya no es una práctica común entre los Estados. La segunda se refiere a la lucha de los pueblos coloniales en contra de la colonización y el apartheid (art.1 del Protocolo I de los convenios de Ginebra). La tercera se refiere a la ocupación de un Estado

Por lo que se refiere a los conflictos armado de índole no internacional o interno la norma jurídica internacional aplicable es el artículo 3 común a los 4 Convenios de Ginebra relativo a los actos que constituyen violaciones graves. En estos conflictos los combatientes rebeldes no tienen la condición de prisioneros de guerra.

d) Crimen de Agresión

El crimen de agresión se incorporó en la primera revisión del ER, en su art.5, en el que se establece que su aplicación queda aplazada hasta que los Estados logren un consenso sobre su definición y las condiciones para su ejercicio. No fue hasta 2010, con la Conferencia de Revisión del Estatuto de Kampala (Uganda), donde quedó detallado el citado crimen en los términos que vamos a tratar en el apartado II.2.2.

2.1.2. La Competencia *Ratione Personae*

La competencia personal consiste en saber qué tipo de personas pueden comparecer y ser juzgados frente a la CPI. La responsabilidad penal concierne solamente a las personas físicas (art.51.1.ER). La Corte no es competente para conocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el enjuiciamiento de las personas físicas se enjuiciarán ante la Corte todo tipo de sujetos sin distinción por el cargo o la autoridad, solo se tiene en cuenta la gravedad del crimen a nivel internacional (art.27 del Estatuto). Además, la cuestión de la responsabilidad penal de un Jefe de Estado o de Gobierno es más latente y primordial dejando así excluido las reglas sobre la inmunidad por razón de la gravedad de los delitos cometidos por estas autoridades.

La competencia personal de la CPI está relacionada con el criterio de la nacionalidad, es decir, que quedará sujeta a la jurisdicción de la Corte toda persona que haya cometido un crimen recogido en el Estatuto y sea nacional de un Estado Parte (art.12.2. b del Estatuto). Por último, referido a la edad, la CPI solo tendrá jurisdicción respecto de las personas mayores de 18 años (art.26 del Estatuto).

2.1.3. La Competencia *Ratione Loci*

La CPI para poder tener jurisdicción sobre los crímenes de índole internacional cometidos en un Estado es condición necesaria que el Estado Parte acepte la jurisdicción de la CPI (art.12.1. y 12. 2.a.ER)

2.1.4. La Competencia *Ratione Temporis*

El ejercicio de la competencia por la CPI en el tiempo es limitado. El art.11.ER señala que la Corte empezará a actuar después de su entrada en vigor. Esto es un límite a la retroactividad de las normas. Para los Estados que se adhieran después de su entrada en vigor la competencia de la CPI comenzará a aplicarse desde la fecha en la que el nuevo Estado sea parte en el Estatuto. Si este nuevo Estado autoriza y acepta que la Corte conozca de ciertos crímenes anteriores a la entrada en vigor del Tratado, la CPI podría llegar a actuar.

Además, el Estatuto introduce el principio de imprescriptibilidad de los crímenes internacionales, con esto se pretende preservar el principal objetivo de la Corte de no dejar impune los delitos contra la paz y la seguridad internacional por el transcurso del tiempo.

Una nueva limitación de la jurisdicción de la CPI es, según el art.124.ER, la relativa a las disposiciones transitorias: cuando un Estado sea parte del Estatuto puede declarar que la competencia de la Corte no se le aplique sino después de 7 años desde la fecha en la que el Estatuto le vincule.

2.2. La Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma: La Materialización del Crimen Agresión.

Con la adopción del Estatuto de Roma y su posterior ratificación por los Estados Parte, la aplicación del crimen de agresión quedó supeditada hasta que las partes llegaran a un acuerdo sobre su definición y las condiciones de su ejercicio (art.123 del Estatuto). Tuvieron que pasar unos años para la conferencia de revisión del Estatuto Roma celebrada en 2010 en Kampala (Uganda). Es el Secretario General de las UN quién lo convocó el 7 de agosto de 2009, pero la determinación de la fecha y lugar fue decidida por Asamblea de los Estados Parte en su resolución CC-ASP/8/Res-6⁴⁹.

La Conferencia de Revisión de Kampala tuvo lugar entre el 31 de mayo y el 11 de junio de 2010. En ella tomaron parte 4.600 representantes de los 67 Estados Parte, otros de 17 Estados no Parte como observadores y también las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. La agenda de la conferencia estaba compuesta por enmiendas propuestas por los Estados Parte, y las propuestas reguladas en el propio ER. Estas últimas eran las relativas a la definición del crimen de agresión, los elementos del crimen y el art.124.ER. De esta conferencia nos interesaremos y abordaremos la cuestión relativa a la materialización del crimen de agresión.

El camino para lograr una regulación consensual de este crimen fue relativamente lento, labor que comenzó después de la entrada en vigor del ER con la creación de un Grupo de Trabajo especial sobre el crimen de agresión. Este grupo, creado por la Asamblea de Estados Partes (AEP), inicio su trabajo en 2003 mediante reuniones oficiales en los distintos periodos de sesiones de esta Asamblea, de reuniones oficiosas celebradas en Liechtenstein y la Universidad de Princeton y también a través de conferencias académicas. Fue la labor conjunta de este grupo con la participación de la AEP la que se presentó a debate en esta conferencia de revisión. Durante esta conferencia había Estados (Francia y Reino Unido) que afirmaban que era el momento adecuado para obtener un consenso sobre este crimen y otros como EEUU que declararon que se tenía que posponer.

⁴⁹ Resolución CC-ASP/8/Res-6 de la Asamblea de los Estados Partes (2009) de 26 de noviembre. Véase en https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-8-Res.6-FRA.pdf

Con la presentación del documento que contemplaba la propuesta de proyecto⁵⁰, se observó que la adopción de una noción sobre el crimen de agresión no generaría un gran problema, pero la cuestión que sería el objeto de la discusión era si la CPI podría enjuiciar un crimen de agresión sin interrupción o la denuncia por parte del Consejo de Seguridad de las NU. Ante este problema hubo diversas propuestas. Una primera fue la Propuesta ABS de Argentina, Brasil y Suiza, en la que se preveía que la entrada en vigor sería un año después de la ratificación por unos determinados números de Estados cuando sean crímenes remitidos por el Consejo de Seguridad y que en el caso de las remisiones por los Estados entraría en vigor cuando fuera ratificado por la 7/8 de los Estados Parte. Hubo una segunda propuesta, el 8 de junio, realizada por Canadá, llamada *menú approach*, donde era necesario el consentimiento del Estado víctima y del Estado agresor para que la CPI ejerciera su jurisdicción. El 9 de junio las negociaciones dieron como resultado una tercera propuesta, la conocida como la ABCS Non-Paper. Una declaración conjunta en la que se establecía que la aplicación del crimen de agresión está sometida al artículo 12 del Estatuto, pero con dos precisiones: primero que todo Estado Parte podría retirarse si lo desea; y segundo que la Corte no ejerce su competencia sobre los crímenes cometidos por nacionales o en el territorio de un Estado que no es Parte. Había otras posturas como la de los Estados africanos y latinoamericanos que abogaban por un ejercicio del crimen de agresión sin la presencia del Consejo de Seguridad; y la postura de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad mostrándose contrarios a estas propuestas de exclusión o limitadora de su actuación.

Tras las duras e intensas negociaciones se adoptó por consenso una serie de disposiciones sobre la noción del crimen de agresión y condiciones de su ejercicio (art.8 bis, 15 bis, 15 ter y 25.1.ER). El art.8 bis⁵¹ contiene finalmente la regulación de este crimen de agresión se trata una regulación especial al considerar al crimen de agresión como un “acto de agresión”. Con esto se pretendía aclarar que el acto de agresión no es solo consecuencia de un crimen de agresión, sino que también se refiere a todo acto de agresión teniendo en consideración sus características, su gravedad y su transcendía. Esta disposición es el resultado textos precedentes: se tomó del Estatuto de Nuremberg las conductas individuales de planificar, preparar, iniciar o ejecutar; la consideración de la agresión como “*el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad territorial o la independencia política de otro Estado*” tiene una gran similitud con el párrafo 4 del art.2 de la Carta de las NU; y la lista de actos de agresión del párrafo 2 del art.8 bis es de la Resolución de la Asamblea General de las UN, n°3314 de 1974.

Respecto de las condiciones de ejercicio el art.15 bis permite la remisión de un crimen de agresión por parte de un Estado Parte al fiscal y el 15 ter regula la remisión por el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta de las UN. Así, se resuelve la problemática presentada. Además, se recogió en el apartado 4 del art.15 bis la Corte no

⁵⁰ Informe del Grupo de Trabajo Especial: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/RC2010/RC-11-Annex.III-SPA.pdf

⁵¹ El artículo 8 bis del Estatuto de Roma: “1. A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un “crimen de agresión” cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. 2. A los efectos del párrafo 1, por “acto de agresión” se entenderá el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.”

podrá ejercer su jurisdicción respecto de los crímenes de agresión cometidos por un Estado Parte siempre y cuando este no haya aceptado explícitamente su competencia.

Esta primera conferencia dio sus frutos con los nuevos artículos incorporados en el ER. Pero, como ocurrió con la entrada en vigor del ER estas nuevas disposiciones estaban sometidas a condiciones al establecerse que no entraría en vigor hasta después del 1 de enero de 2017⁵².

3. La Activación de los Procesos ante la CPI: La legitimación de los Estados, el Fiscal y el Consejo de Seguridad.

Una vez abordada el tema del ámbito de competencia de la CPI es necesario conocer los modos de activación de los procesos, en definitiva, es la legitimación activa para la puesta en marcha de los mecanismos de la CPI. Esta legitimación es relativamente amplia. Así, se regula en el art.13 del Estatuto la legitimación activa: la remisión por los Estados Parte, la remisión por el Fiscal y la remisión por el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta de las NU.

3.1. La legitimación por un Estado Parte.

Una legitimación habilitada por el artículo 13 y 14 del ER. En un primer momento durante las negociaciones se planteó la posibilidad de que solo el Estado Parte involucrado podía informar a la CPI sobre la existencia de los crímenes de índole internacional. Esta idea fue totalmente superada con el art.14 del Estatuto, donde se especifica que la remisión puede ejercerse por “*Todos los Estados Parte*”. Con esta legitimación tan extensiva se pretende garantizar el correcto ejercicio de la competencia de la Corte y no permitir que crímenes de interés para toda la comunidad internacional queden impunes.

El procedimiento es simple, es el Estado o Estados Parte que teniendo conocimiento de crímenes cometidos y de la competencia de la Corte, quien se encargara de informar al fiscal, para que así este último realice las investigaciones pertinentes para proceder o no a una acusación formal.

3.2. La legitimación por el Fiscal.

El fiscal es una figura presente en las jurisdicciones penales internas, que también se ve traspuesto en el ámbito del Derecho Penal Internacional. Es una figura que obtuvo una autonomía de actuación en los Estatutos de los TPIY y TPIR. También en el proyecto de estatuto de la CDI se discutía que el fiscal y sus subordinados tienen autonomía respecto de la Corte, que son elegidos por la mayoría absoluta de los Estados Parte y que no reciben instrucciones de ningún Estado o autoridad. Por lo tanto, que gocen de una total independencia para ejercer sus actuaciones sin injerencias en su competencia.

Después de las intensas negociaciones con las propuestas de los distintos Estados y organismos, el art.15 del Estatuto habilita al fiscal para empezar una investigación de *mutuo proprio*. Por lo tanto, el fiscal podrá solicitar la activación del proceso fundándose en informaciones recibidas de cualquier fuente, pero siempre y cuando haya procedido a

⁵² Anexo I con los países ratificantes.

verificar la veracidad de las informaciones recibidas. Además, la Sala de Cuestiones Preliminares tiene que considerar que existen indicios suficientes para iniciar una investigación. Las organizaciones internacionales, los individuos, las organizaciones no gubernamentales y los Estados no Parte del Estatuto pueden contactar al fiscal informándolo de ciertos crímenes y este según su juicio puede actuar o no.

3.3. La legitimación por el Consejo de Seguridad.

“El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes⁵³”

Es el art.13.b quien regula esta legitimación. Esta habilitación está ligada con el objetivo de mantenimiento de la paz y la seguridad. Pero no es una remisión que vincula directamente a la Corte, sino que tiene proceder a investigar la situación para poder admitirlo y rechazarlo. Por lo tanto, la actuación del Consejo de Seguridad no influye en la autonomía de jurisdiccional de la CPI. Además, cuando es el Consejo de Seguridad quien remite la cuestión no es preciso la autorización del Estado afectado geográficamente ni del Estado donde el acusado es nacional.

⁵³ Art.13.b.ER [http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute\(s\).pdf](http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf)

SEGUNDA PARTE
LA APLICACIÓN MATERIAL DE LA JUSTICIA PENAL
INTERNACIONAL: ALGUNOS CASOS QUE HAN SIDO
CONOCIDOS POR LA CPI

IV. LOS PROCESOS INCOADOS ANTE LA CPI: ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS

Con el establecimiento definitivo de la Corte, sus primeros años después de su ratificación se dedicaron mayoritariamente al establecimiento de las distintas instituciones que lo integran. Un proceso de integración que se completó gracias a la cooperación de los Estados parte.

Desde la puesta en marcha de esta jurisdicción internacional en 2002, la CPI ha sido una Corte relativamente activa con 26 casos incoados⁵⁴ ante sus instituciones. De los 26 casos incoados: 12 están en la fase preliminar; 4 en proceso ante la Corte; 5 cerrados debido a que los cargos no fueron confirmados, por el retiro de los cargos, por la exculpación o por la anulación de los cargos; 3 se encuentran en la fase de reparaciones y compensaciones a las víctimas después del proceso y la sentencia dictada por la Corte contra los responsables; y 2 casos están en la fase de recurso ante la Corte.

De los 26 casos incoados ante la CPI hemos seleccionado 2 casos para estudiarlos en el presente trabajo de forma más intensa. Por lo que se refiere al primero de ellos, la situación relativa a la República Democrática del Congo (RDC) es sobre Thomas Lubanga Dyilo, un excomandante militar del Reagrupamiento Congoleño para la Democracia-Movimiento de Liberación Nacional, quien tuvo una intensa participación en las dos guerras que afectaron el país. Fue condenado por la Corte en 2012 del crimen de guerra de reclutamiento y aislamiento de niños menores de quince años y hacerles participar a la vez activamente en hostilidades⁵⁵. La elección de este primer caso no se debe a las largas dilataciones del proceso, ni a la complejidad del proceso en sí, ni tampoco a las vicisitudes que surgieron durante el mismo, sino por el hecho de que desde la puesta en marcha de la CPI fue la primera sentencia dictada por este tribunal.

Por lo que se refiere al segundo caso, la situación en el Darfur, el presidente Omar Hassan Ahmad Al Baghir es sospechoso de cinco crímenes contra la humanidad, dos crímenes de guerra y tres crímenes de genocidio cometidos en el territorio del Darfur. Actualmente es un caso que está en una fase preliminar debido a que, desde el primer mandato de detención publicado en 2009, el sospechoso no se encuentra a disposición de las autoridades de la CPI⁵⁶. Además de lo controvertido de este caso, lo relevante de su elección es que es un caso remitido por el Consejo de Seguridad de las NU⁵⁷, al considerarse que la situación en dicho territorio era una amenaza para la paz y la seguridad internacional.

V. EL CASO LUBANGA.

1. El contexto: una breve presentación de los hechos.

Thomas Lubanga Dilo ciudadano congoleño nacido en 1960 en Jiba (situado en la región de Ituri, región del norte-este de la RDC), pertenece a la etnia de los Henna y era

⁵⁴ Véase el Anexo II en el que se detalle la situación de los 26 casos que ha conocido la CPI.

⁵⁵ El caso Lubanga: <https://www.icc-cpi.int/drc/lubanga/Documents/lubangaFra.pdf>

⁵⁶ El caso Darfour: <https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir/Documents/albashirFra.pdf>

⁵⁷ Remisión a través de la Resolución 1593 (2005) [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1593%20\(2005\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1593%20(2005))

psicólogo. Tuvo una importante presencia en las dos guerras libradas en la República Democrática del Congo⁵⁸. Su incorporación a la vida política fue a finales de 1999 y principios del 2000. Lubanga era comandante en jefe de la Fuerza Patriótica para la Liberación del Congo (FPLC), esta fuerza era a su vez ala militar de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC). Este último, fue creado por Lubanga el 15 de septiembre con la firma de su Estatuto y es un grupo rebelde formado exclusivamente por miembros de la etnia Hema. En 2002 la UPC fue rebautizado como la Unión de Patriotas Congoleños/Reconciliación y Paz (UPC/RP) y Lubanga fue elegido presidente. La UPC pretendía reaccionar en nombre de la población perteneciente a la etnia Hema.

En la región de Iturri existía una incesante guerra entre la etnia Hema y Lendu por el control de los recursos naturales de la región (madera, oro, diamantes, coltán y petróleo). Entre 2002 y 2003 la UPC se enfrentó en esta lucha contra las milicias Lendu, como consecuencia del enfrentamiento la UPC fue responsable de graves atentados contra los derechos humanos, de masacres perpetrados contra otros grupos étnicos, de ejecuciones, actos de tortura, de violaciones, de saqueos a gran escala. Durante el conflicto Lubanga reclutó como combatientes a 3000 niños menores de 15 años para la FPLC, que fueron obligados a luchar, a hacer tareas domésticas y proteger a sus superiores. Además, también eran reclutadas niñas, obligadas a luchar y a ser esclavas sexuales. Esta lucha incesante por el control de los recursos de la región acabo con la vida de 60000 civiles. Tras el conflicto armado, el Gobierno congoleño comenzó la persecución y arresto de los rebeldes implicados. No fue hasta el 3 de marzo de 2004, que la RDC⁵⁹ renvió la situación a la CPI, según la habilitación que le daba los artículos 13.a y 14 del Estatuto de Roma. Una competencia *ratio temporis* que comenzaba desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma, el 21 de julio de 2002.

2. El proceso ante la CPI: de la orden de detención a la primera sentencia de la CPI.

2.1. Un proceso marcado por las dilataciones

El fiscal antes de proceder a la investigación oficial de los hechos procedió a un análisis preliminar de la cuestión. La investigación comenzó oficialmente el 21 de junio 2004 y no fue hasta el 13 de enero de 2006, que el fiscal deposito finalmente ante la Sala de Cuestiones Preliminares I (SCP) su investigación para que este deliberara una orden de arresto.

En la orden de arresto del 10 de febrero de 2006 se consideró que había indicios razonables para pensar que Thomas Lubanga era penalmente responsable de crímenes de guerra, en el sentido del art.25.3.a.ER. Era presuntamente responsable del reclutamiento de niños menores de 15 años. Estos niños fueron formados con el fin de participar activa y obligatoriamente en las hostilidades (artículos 8.2.b.xxvi y 8.2.e.vii ER). Lubanga era el presunto responsable directo por el hecho de ser presidente de la UPC y comandante en jefe de la FPLC, por lo que ejercía una autoridad de facto, tenía el control ultimo de las decisiones adoptadas, la puesta en práctica y era consciente de su poder en el seno de

⁵⁸ La primera se libró entre 1996 y 1997; la segunda librada entre 1998 y 2003 y conocida como “La Guerra Mundial de África”, donde murieron 3,8 millones personas

⁵⁹ La RDC ratifico el Estatuto de Roma el 11 de abril de 2002, por lo que como miembro tenía competencia para remitir situaciones y no habría problemas relativas a la competencia de la CPI.

estos dos organismos⁶⁰. Fue puesto a disposición ante la Corte por la RDC, después de la orden del 17 de marzo de 2006. Hasta el 29 de enero de 2007 no se le imputó el crimen de guerra de reclutamiento y aislamiento de niños y niñas menos de 15 años, tal y como viene formulado en el art.8.2.e.vii.ER

Tuvieron que pasar años para que se dictará la sentencia del primer proceso incoado ante la Corte⁶¹. El alargamiento del proceso se debió a las numerosas interrupciones que sufrió el proceso desde su inicio. Interrupciones debido sobre todo a la actuación del fiscal del caso. La primera tuvo lugar el 13 de junio de 2008. La Sala de Primera Instancia (SPI) decidió declarar el sobreseimiento del proceso y la puesta en libertad del acusado, debido a que el fiscal no informó a la defensa ni al tribunal de ciertas pruebas relevantes para el proceso. Dicho proceso se reabrió nuevamente el 26 de enero de 2009. Una segunda interrupción tuvo lugar el 22 de mayo de 2009, debido a una demanda conjunta presentada por los representantes de las víctimas, solicitando una recalificación de los cargos del acusado. Demandaban la inclusión de los tratos inhumanos y crueles y la esclavitud, en virtud del art.55.2.ER. SPI respondió favorablemente el 14 de julio del 2009, pero el 8 de diciembre del mismo año la Sala de Apelaciones (SA) revocó la decisión. La SA consideró que la SPI había hecho una interpretación extensiva del art.55.2, no aceptada. Por ello no era posible incluir nuevos hechos y circunstancias que no estaban en el escrito de acusación del fiscal. El proceso se reanudó de nuevo el 7 de enero de 2010. La tercera interrupción fue el 8 de julio de 2010, donde se dictó el sobreseimiento de la causa y la puesta en libertad del acusado. Esta última se debía también a la negativa del fiscal de informar a la defensa de la identidad de los 143 intermediarios⁶². La decisión fue apelada, la SA confirmó la decisión de la SPI el 8 de octubre de 2010, al considerar que el fiscal había incumplido su deber de velar y respetar los derechos del acusado (art.64.ER). No obstante, la SA suspendió el sobreseimiento y la puesta en libertad del acusado al considerar que la SPI debía haber procedido a la sanción del fiscal en el sentido del artículo 71 del Estatuto.

Finalmente, tras 204 audiencias en las que se escucharon a 36 testigos presentados por el fiscal, 24 por la defensa y 129 víctimas a las que se les permitió su presencia, representados por dos equipos, la sentencia se dictó el 14 de marzo de 2012.

2.2. El primer veredicto de la CPI y el derecho a la reparación de las víctimas.

Thomas Lubanga Dylo fue declarado por unanimidad de los magistrados culpable en calidad de coautor (por la existencia de un plan común y su posterior ejecución) de crímenes de guerra de reclutamiento y utilización de niños menores de 15 años. La pena

⁶⁰ Orden de detención: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_00195.PDF

⁶¹ La sentencia ICC-01/04-01/06 https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_08207.PDF

⁶² Para poder entender esto hay que tener en cuenta que este proceso se fundaba sobre todo en las declaraciones de las víctimas, estas declaraciones eran proporcionados al fiscal por los intermediarios externos a la Corte que localizaban las potenciales víctimas. El problema aquí es que ha habido víctimas que se han retractado de su testificación argumentando que subieron presiones de los intermediarios o se les soborno para que testificaran. Por lo que era necesario conocer la identidad de estos. Ana Gemma López Martín. *La Corte Penal Internacional Hace Historia: Primer Veredicto de Culpabilidad y Primera Sentencia Sobre Reparación a las Víctimas en el Caso del Fiscal V. Thomas Lubanga Dylo* <https://revistas.ucm.es/index.php/FORO/article/download/41494/39593>

era de 14 años de encarcelamiento y actualmente se encuentra cumpliendo su pena en una cárcel en la RDC.

En el proceso la presencia de las víctimas como afectados fue relevante a través de los testimonios y pruebas. Se les reconoció este derecho como sujetos de derecho y personas jurídicas del mismo. Con esto se les permitió acceder a los escritos, pero solamente a los públicos. Pudieron presentar pruebas y se les otorgó derecho al anonimato. Lo que se refiere a la naturaleza jurídica del conflicto en el Ituri, la SPI lo declaró conflicto interno y no internacional (aunque la SCP lo consideró como internacional al estar la región ocupada por el ejército ugandés desde 2003), al ser un conflicto entre la UPC/FPLC y múltiples grupos armados no-estatales.

Tras el establecimiento de la responsabilidad penal individual del acusado, se procedió a la declaración del derecho a la reparación de las víctimas y el establecimiento de las directrices para ello en la sentencia del 7 de agosto de 2012. El derecho de las víctimas a la reparación del daño es absoluto y reconocido en las disposiciones internacionales. La finalidad perseguida con estas reparaciones es: obligar a los responsables a reparar el daño causado, proporcionar justicia, aliviar el sufrimiento de las víctimas, impedir futuras violaciones, garantizar que los acusados respondan de sus actos y la efectiva reintegración de las víctimas.

La Corte en su decisión optó por acordar a las víctimas reparaciones conjuntas, es decir, una reparación colectiva. Esta opción no requiere operaciones complejas o costosas como las reparaciones individuales, en donde será complicado estudiar el caso de cada víctima. Además, se disponen de fondos limitados para las reparaciones. El derecho a la reparación era aplicable a todas las víctimas, incluso aquellos que no han participado en el proceso. Las víctimas han de ser tratadas de forma equitativa, sin ninguna discriminación posible. Los beneficiarios pueden ser las víctimas afectadas directa o indirectamente (familiares o personas que se vieron implicados al ayudar a las primeras). Lo relevante en lo último, es la verificación de la existencia de una relación entre las víctimas directas e indirectas. En este concepto se pueden incluir las personas morales, ONGs o hospitales. En la aplicación de las reparaciones es posible la adopción de medidas discriminatorias positivas a favor de las mismas, que están en una situación de necesidad urgente (víctimas de violencias sexuales, niños traumatizados, etc.)

Las modalidades generales de reparaciones son la restitución, indemnización y la rehabilitación (art.75.ER). La primera es posible para las personas morales; la segunda es posible siempre y cuando se pueda cuantificar el daño, si la reparación es apropiada y proporcional y si los fondos disponibles lo posibilitan. La determinación de dónde procedería la reparación económica era problemática, al no tener el acusado medios para sufragarlo. La sentencia consideró responsable de ello al Fondo Fiduciario a favor de las víctimas (FFV) (art.79.ER), si los fondos de los que dispone lo posibilitan. También otro tipo de reparación, la simbólica, en la que el Lubanga procede a disculparse en frente de las víctimas, pero la Corte recalca que siempre y cuando el acusado esté dispuesto.

Para la puesta en marcha de las reparaciones a las víctimas se determinó primero al FFV el control y supervisión de las reparaciones; segundo, otra sala encargada de supervisar la labor de la primera. Además, se creó un equipo multidisciplinario de expertos para ayudar a la Corte en su objetivo de averiguar en general la trascendencia del daño para proceder a las reparaciones. En un primer momento el FFV, el secretario y los expertos deben determinar las localidades participantes en el proceso. En segundo lugar, se debe hacer una investigación en esas localidades. En tercer lugar, los expertos deben evaluar

el daño producido. En cuarto lugar, se debe proceder a un debate en las localidades para informar de los principios y el proceso de las reparaciones. Por último, proceder a determinar las reparaciones para cada localidad. La situación será supervisada por la SPI para proceder a su aprobación o no.

Esta primera sentencia sobre las reparaciones, modificada por la sentencia del 3 marzo de 2015, no se ha materializado.

VI. EL CASO SUDÁN.

1. El contexto histórico que permite conocer los términos del conflicto

Sudán es un país africano del noreste que, desde su independencia de Reino Unido en 1955, ha estado en una constante guerra civil entre el Norte⁶³ y el Sur⁶⁴. El país también tuvo enfrentamientos en el territorio de Darfur, una región que se encuentra en el noroeste del país, formada por árabes de religión musulmana y numerosas etnias de la África negra.

Con la independencia de Sudán, los sudaneses árabes monopolizaron el poder. La población de Darfur solicitaba un mayor reparto del poder, una mayor participación en la vida política y tener una presencia en el proceso de creación de un Sudan más libre. Su indignación afloró más en 1970 cuando el presidente Numeiry abolió la administración nativa de Darfur. Pero no fue hasta la llegada del presidente Omar Al Bashir en 1989, que la situación se agravó en todo el país con el proceso de islamización radical y la persecución militar de los opositores. En Darfur la situación era extrema por la diversidad tribal, la explosión demográfica y las continuas sequías. Todo ello acabó provocando el descontento de la población, teniendo como consecuencias la agravación del conflicto y la violencia. El gobierno respondió a estas insurrecciones por la actuación de las Fuerzas armadas de Sudán y los paramilitares de la Fuerza de Defensa Popular (FDP). Éstas últimas colaboraron posteriormente con las milicias Janjaouid.

La guerra en la región estalló finalmente el 25 de febrero de 2003 con el levantamiento de la comunidad negra atacando el principal centro militar del territorio de Jebel Marra. Estos rebeldes formaban parte del Frente de Liberación de Darfur. El Gobierno respondió a este ataque con un intenso contrataque en la región por cielo y tierra, generando una grave crisis humanitaria. El Frente de Liberación de Darfur tras este primer ataque exitoso pasó a denominarse el Movimiento y Ejército de Liberación de Sudan (SLM/A). El grupo rebelde obtuvo apoyo y armamentos del Chad, Eritrea y de Libia. Los rebeldes luchaban por un Sudán unido y democrático con un reparto equitativo del poder entre las distintas etnias del país.

Durante ese periodo surgió en escena un nuevo grupo rebelde, el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI), grupo que se unió a la SLM/A y sus reivindicaciones. Estos dos grupos tenían sus diferencias: por un lado, la SLM/A abogaba por una separación entre Estado y religión; por otro lado, el MJI estaba en contra del establecimiento de un Estado laico. A pesar de las diferencias, hubo una coordinación que provocó un ataque conjunto, el 25 de abril de 2003, al aeropuerto de la capital de Darfur del norte. En el ataque murieron 75 soldados, destruyeron aviones, helicópteros y secuestraron al jefe de la base aérea. La

⁶³ La población del Norte del país es mayoritariamente árabe de religión musulmana, que han tenido desde la independencia el monopolio y control del poder político.

⁶⁴ La población del Sur del país comprende la África negra y de religión cristiana en su mayoría. Los del Sur votaron su independencia de los del Norte en 2011, esta independencia agravó más el contexto de la guerra. Una lucha que aún no ha cesado.

reacción del Al Bashir no tardó en manifestarse declarando el Estado de excepción, concentrándose en acabar con el conflicto en Darfur. Para ello obtuvo la ayuda de las milicias Janjaouid, que no tardaron en sembrar terror arrasando aldeas, violando mujeres, matando niños y ancianos sin ninguna piedad⁶⁵. Todo este conflicto generó una gran crisis humanitaria latente en la actualidad: 4,7 millones afectados; entre 200.000 y 300.000 muertos; 2,7 millones de desplazados⁶⁶. El territorio desde el inicio del conflicto ha necesitado crucialmente ayuda e intervención humanitaria⁶⁷, la cual en un principio fue rechazada por el Gobierno.

Durante los años de conflicto hubo intentos de paz y alto al fuego que nunca llegaron a buen término. El CSNU dictó una serie de resoluciones solicitando a las partes el diálogo para conseguir el alto al fuego. La Unión Africana ha intervenido desplegando un mecanismo para lograr un acuerdo entre las partes, la Misión de la Unión Africana para Sudan (2004⁶⁸).

2. El CSNU y su intervención en Sudán

2.1. Las primeras actuaciones: las resoluciones y declaraciones del presidente del CSNU.

En general desde los primeros años del conflicto sudanés, éste no ha pasado desapercibido por la Comunidad Internacional por la gravedad de los crímenes, la intensa violación de los derechos humanos, la crisis humanitaria con la influencia de desplazados y refugiados.

El 11 de junio de 2004 el CSNU emitió la Resolución 1542⁶⁹ tras la firma de los Protocolos de Machakos⁷⁰, para que las negociaciones y los acuerdos aceptados por ambas contiendas fueran correctamente implantados. Para el impulso de los diálogos entre las partes, con esta resolución el CSNU pidió al secretario de las NU la creación de la Misión Avanzada de las NU en el Sudan (UNAMIS).

La intervención del CSNU no se limitó a la guerra civil entre Norte y Sur, sino también al conflicto en la región de Darfur. Una de las primeras preocupaciones se manifestó en la declaración hecha por el presidente del CSNU el 25 de mayo de 2004 en el 4978 sesión

⁶⁵ El Gobierno sudanés ha negado siempre su colaboración con estas milicias, determinando que estaban fuera de su control y que no seguían ordenes suyas.

⁶⁶ Información de UNICEF. https://www.unicef.org/infobycountry/sudan_darfuroverview.html

⁶⁷ Una actuación que no es contemplado por el Derecho Humanitario durante un conflicto de dicha magnitud. El derecho a la humanitaria es condición imprescindible para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional, durante la intervención los agentes humanitarios están dotados de protección. Situación afirmada por el CSNU en su resolución 1502 (2003) sobre la protección del personal de las NU, personal asociado y personal humanitaria en las zonas de conflicto. [http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1502%20\(2003\)](http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1502%20(2003))

⁶⁸ La Misión de la Unión Africana para Sudan fracasó en un primer momento por la falta de experiencia y de efectivos. En una segunda intervención en 2005 el fracaso era previsible por la amplitud del conflicto armado.

⁶⁹ Resolución 1547 del Consejo de Seguridad (2004) de 11 de junio. Véase en [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1547%20\(2004\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1547%20(2004))

⁷⁰ El Protocolo de Machakos es un acuerdo entre las partes del conflicto de Sudan, firmado el 20 de julio de 2002. Fue un esfuerzo para lograr la paz entre los sudaneses del Norte y del Sur. <http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/unmis/background.shtml>

del CS⁷¹. La declaración el presidente insistía una vez más en la gravedad de la crisis humanitaria, la necesidad de ayuda de la población de la región, las violaciones masivas de derechos humanos e internacional humanitario. Además, instó a las partes al cese del fuego y la protección de los civiles. El presidente solicitó en particular al gobierno sudanés que facilitara y permitiera la entrada de la ayuda humanitaria.

No fue hasta el 30 de julio de 2004, que el CSNU dictó una nueva Resolución que, afectaba directamente a la región de Darfur, la Resolución 1556⁷². Una vez más el CSNU reafirmó su preocupación por la crisis humanitaria, la violación de derechos humanos y sobre todo su preocupación por la inseguridad de la sociedad civil. El CSNU hace un llamamiento a las partes del conflicto para lograr un cese al conflicto armado, en particular al gobierno, cuya labor en el mantenimiento de la paz y seguridad de sus ciudadanos es imperativo e imprescindible. En la resolución se acabó considerando que *“la situación en el Sudán constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y para la estabilidad en la región”*. Por ello en virtud del Capítulo VII de la Carta de las UN solicitó la intervención de la UNAMIS y la colaboración del gobierno permitiendo la entrada de la ayuda humanitaria con el fin de hacer frente a la crisis.

2.2. La Comisión de Investigación Internacional para la investigación de crímenes en Darfur.

La falta de respuesta a las primeras solicitudes del CSNU por parte de los implicados tuvo como consecuencia la Resolución 1564 del CSNU (18 de septiembre de 2004⁷³). En esta Resolución el CSNU, solicitó al secretario de las NU la creación de una Comisión Internacional para la investigación de las violaciones de derechos humanos y humanitarios en la región de Darfur.

En octubre de 2004 el Secretario nombró un órgano de 5 miembros, solicitando que el informe estuviera listo en 3 meses. La Comisión comenzó su labor el 25 de octubre de 2004. A ésta se le encomendó varias labores: en primer lugar debía investigar la veracidad de las alegaciones relativas a las violaciones cometidas por ambas partes del conflicto; en segundo, la calificación de las violaciones y verificar si algunos delitos pueden ser considerados como crímenes de genocidio; en tercero, la Comisión a raíz de las investigaciones ha de identificar los presuntos autores de los crímenes; y por último, la comisión debía proponer mecanismos para solicitar la responsabilidad penal de estos presuntos autores. La comisión podía solicitar la ayuda de ambas partes del conflicto para una mayor eficacia en sus investigaciones.

La Comisión realizó un primer viaje al país del 8 al 20 de noviembre. Durante el mismo se reunió con representantes estatales, funcionarios, representantes de ONGs, representantes de partidos políticos, representantes extranjeros en Sudán y otros. Hubo un segundo viaje del 9 al 16 de enero de 2005, donde se reunieron especialmente con los testigos detenidos, representantes de la sociedad civil y funcionarios de la ONU. En un principio la cooperación del gobierno fue activa sin ningún obstáculo. Pero la comisión

⁷¹ La Declaración del Presidente del CSNU <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2004/18>

⁷² Resolución 1556 del Consejo de Seguridad (2004) de 30 de julio. Véase en [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1556%20\(2004\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1556%20(2004))

⁷³ La Resolución 1564 del Consejo de Seguridad (2004) de 18 de septiembre. Véase en [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1564%20\(2004\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1564%20(2004))

presenció algunos impedimentos a su investigación, como fue la negativa a entrar en el centro de detención de Khartoum o el hecho de que numerosos testigos sufrieron presiones por parte de las autoridades. Por parte de los rebeldes (la SLM/A y el MJI) la cooperación fue más abierta, sin ningún tipo de obstáculo a la hora acceder a los territorios bajo su control.

Como resultado de las investigaciones la Comisión concluyó que hubo ataques de ambos bandos. Veremos cada uno de ellos:

a) Los ataques de las fuerzas armadas gubernamentales en colaboración con la milicia Janjaouid⁷⁴.

Los ataques comenzaban temprano en la mañana hasta la salida del sol, estaban dirigidos a las mujeres, que violaban y luego asesinaban y a los niños. Las casas, colegios, mercados, hospitales y otras infraestructuras eran completamente destruidas o incendiadas. Un ejemplo, el ataque de enero de 2004 en Centra Surra, un pueblo de más de 1700 habitantes en el Sur de Darfur, donde murieron 250 personas y 30 desaparecidas. Eran ataques contra la población civil negra en la que participaban las fuerzas armadas terrestres y aéreas en colaboración con los Janjaouid.

Los Janjaouid atacaban las aldeas a caballo matando, quemando, saqueando y violando a las mujeres. En el momento en el que actuaban en colaboración con las fuerzas estatales lo hacían como representantes estatales. Una cooperación que se reflejó cuando esta milicia se incorporaba a las FDP y llevaban puestos sus uniformes. En ese entonces sus actuaciones criminales no solo entablaban una responsabilidad individual, sino que conllevan la responsabilidad penal de las autoridades superiores que habían planificado y ordenado el ataque. Sin embargo, esta milicia actuaba por cuenta propia sin mandato del gobierno, como sucedió en abril de 2003 en una aldea al oeste de Darfur dejando 64 muertos enterrados en fosas comunes. La justificación dada por el gobierno a los ataques en las aldeas era que, si presenciaban que los rebeldes estaban en dicho territorio, éste perdía su estatuto jurídico de territorio protegido, incluidas las personas que se encontraban allí. Por lo tanto, la aldea en cuestión se convertía en un objetivo militar⁷⁵.

b) Ataques de los rebeldes⁷⁶.

Los grupos rebeldes también fueron responsables de ataques, pero en su caso eran tenían un objetivo más bien militar: la policía o fuerzas de seguridad del Estado. Pero en sus ataques llegaron a afectar a la población civil como ocurrió en 4 de octubre de 2003 en Kulbus perpetrado por el MJI. Ataque que dejó a 42 soldados asesinados y 17 civiles. También son responsables de ataques a camiones de ayuda humanitaria, autobuses que transportaban personas o trenes que transportaban mercancías.

Los ataques de ambas contiendas pueden ser consideradas como crímenes de guerra por un lado y por otros crímenes de lesa humanidad. En particular el Derecho Internacional Humanitario presagia una protección de los civiles y bienes civiles durante un conflicto

⁷⁴ Informe de la Comisión (S/2005/60) http://www.iccnw.org/documents/Rapport_Commission_IONU_Darfour.pdf

⁷⁵ Son aclaraciones hechas por el Ministro de Defensa de Sudan ante la comisión de investigación: «*celui-ci n'est plus une localité civile, mais devient un objectif militaire*». Pour lui, «*un village couvre une petite superficie qu'il n'est pas facile de diviser en sections, si bien que la totalité du village devient un objectif militaire*». http://www.iccnw.org/documents/Rapport_Commission_IONU_Darfour.pdf

⁷⁶ Pie de pag. 74

armando. La máxima protección de estos, sobre todo de los primeros. Por ello ante un conflicto hay que identificar las personas que forman parte de las hostilidades y las que no⁷⁷. Ambas partes en el conflicto deben verificar primero antes de actuar la no presencia de civiles y deben velar por la proporcionalidad en el momento de actuar.

La comisión en su investigación no previó el crimen de genocidio en los ataques propiciados por ambas partes. Ciertamente es que eran ataques que atentaban gravemente contra la integridad física y mental de tres etnias de la comunidad de la África negra (los Fur, Massalit y Zaghawa). Pero las investigaciones de la comisión revelaron que las etnias atacadas no mostraban diferencias con los autores: tenían la misma religión, lengua, los matrimonios mixtos eran normales y la misma apariencia física. Además, los grupos pro-gobierno no eran exclusivamente árabes-musulmanes, sino que también había negros o cristianos y lo mismo sucede en la composición de los rebeldes. Un factor que desmontaba la existencia de un crimen de genocidio fue el hecho de que no había una intención genocida. Esto es que en los ataques se mataban a ciertas personas, generalmente grupos de hombres que se consideraban rebeldes. El resto de los habitantes eran liberados y obligados a abandonar la aldea a lugares designados por el gobierno. En definitiva, la comisión concluyó en el reparto de responsabilidad entre los grupos rebeldes y el gobierno, pero el grado de responsabilidad del Estado por las masacres era de un nivel superior.

La solución prevista por la comisión, respondiendo a la cuarta tarea encomendada, fue la remisión del asunto a la CPI en virtud del Capítulo VII de la Carta de las NU. Remisión justificada:

- En primer lugar, en que la Corte fue creada para enjuiciar los crímenes investigados;
- en segundo, que es poco probable que el gobierno decida iniciar una investigación por *mutuo proprio*;
- en tercer lugar, sólo la Corte es capaz de juzgar a los principales jefes del gobierno sudanés y de los grupos rebeldes;
- en cuarto lugar, la Corte es signo de imparcialidad proporcionando mayores garantías a las partes;
- en quinto lugar, recurrir a la creación de un tribunal *ad hoc* tomaría tiempo e implicaría mayores gastos.

A priori la CPI no tendría jurisdicción sobre este caso al no ser Sudán parte del Estatuto de Roma. Pero la vía establecida por la comisión es que la Corte sea competente porque el propio Estatuto habilita la remisión al fiscal por el CSNU (art.13. b. ER). El CSNU hizo uso del derecho que le otorga el Estatuto, tras analizar el informe de la comisión, remitiendo el asunto a la fiscalía de Corte a través de la resolución 1593 (2005⁷⁸).

⁷⁷ Por una parte, está el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, regula la protección de los civiles que no forman parte del conflicto. Por otro lado, está su Protocolo Adicional II del 8 de junio de 1977, aplicado a los combatientes de los conflictos armados. <https://www.icrc.org/spa/assets/files/publications/convenios-gva-esp-2012.pdf>
<https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm>

⁷⁸ La Resolución 1593 del Consejo de Seguridad (2005) de 31 de marzo. Véase en [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1593%20\(2005\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1593%20(2005))

3.El proceso de investigación por la CPI: las órdenes de detención.

La fiscalía de la Corte, una vez recibida la Resolución teniendo en cuenta las investigaciones precedentes y procediendo a sus propias investigaciones, concluyó en el reconocimiento de tres causas diferentes y sus respectivos responsables.

3.1. La primera causa: Ahmad Muhammad Haroun y Ali Muhammad Ali-Abd-Al-Rahman.

El fiscal instruyó el 27 de febrero de 2007 ante la SCP, solicitando la emisión de una orden de detención contra estos dos sujetos. Las investigaciones mostraron que hay indicios razonables para creer que son responsables de crímenes de lesa humanidad a través de ataques sistemáticos y generalizados a civiles. Principalmente los actos de asesinato, persecución, tortura, violaciones, la privación de libertad y otros actos inhumanos. Además, se añade el crimen de guerra cometido contra los combatientes opositores. En particular:

Ahmad Haroun: era ministro de Interior (2003-2005) y posteriormente ministro del Estado encargado de los asuntos humanitarios. Presunto responsable directo de ejercer las funciones de su rango dirigía el despacho de seguridad de Darfur, por lo que establecía la coordinación entre los órganos del gobierno. Incluyendo también en este concepto de “Órgano de gobierno” la dirección de la milicia janjaouid. Además, era responsable de la financiación y el rearme de las milicias. Con su actividad era consciente y conocía que los ataques eran dirigidos contra civiles. Por ello, se le consideró penalmente responsable de 20 crímenes contra la humanidad y 20 crímenes de guerra⁷⁹, en el sentido del artículo 25.3 b y d del Estatuto⁸⁰.

Ali Kushayb: se presume que fue dirigente y miembro de la FDP y uno de los altos cargos de los janjaouid (2003-2004). Presunto responsable de los crímenes al ser considerado el intermediario directo entre las milicias y el gobierno. Se encargaba del reclutamiento de los combatientes, proporcionándoles provisiones y armamento para actuar. Participó en el plan común ideado y ejecutado por las FDP y las milicias para atacar a la población civil. Por ello, se le consideró penalmente responsable de 22 crímenes contra la humanidad y 23 crímenes de guerra⁸¹; en el sentido del artículo 25.3 a⁸² y d.

En virtud de todo ello, los magistrados de la Sala emitieron el 27 de abril de 2007 dos órdenes de detención contra estos sujetos. Orden que fue trasladada al gobierno sudanés, el cual dio a entender que no procedería a las detenciones, decisión que fue incluso reiterado públicamente por Al Bashir. Las órdenes de detención siguen por lo tanto pendientes de ejecución.

⁷⁹ Los cargos detallados: <https://www.icc-cpi.int/darfur/harunkushayb/Documents/harunkushaybFra.pdf>

⁸⁰ 25. 3. *De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien: b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado en grado de tentativa; d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común.*

⁸¹ Los cargos detallados: véase pie de pág. 79

⁸² 25.3.a: *a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente responsable;*

3.2. La Segunda Causa: Omar Hassan Ahmad Al Bashir.

El 14 de julio de 2008, el Fiscal depositó ante la SCPI la acusación para que este último dictara un orden de arresto contra Al Bashir, actual presidente de Sudán desde 1993. El fiscal en sus investigaciones imputó al presunto sospechoso los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de genocidio. Esto último algo novedoso dado que la comisión de investigación había excluido este crimen.

Se le responsabiliza al gobierno de los crímenes cometidos entre marzo de 2003 y 14 de julio de 2008. Por un lado, los crímenes de guerra durante la campaña contra la insurrección de los grupos rebeldes, en el sentido del art.8.2 e, f, i, u.ER. La labor del gobierno en la comisión de estos crímenes fue un componente central relevante en esta campaña. Por otro lado, se establece la responsabilidad del gobierno por los crímenes cometidos contra los civiles considerados cercanos a los grupos rebeldes, esto es, crímenes contra la humanidad en el sentido del art.7.1 a, b, d, f y g.ER. El gobierno tenía pleno conocimiento de los planes y la ejecución de estos. Además, incitaba con su actuación o inacción estos crímenes. Se concluyó que el presidente era responsable directo, al tener un rol que va más allá de la coordinación y la ejecución material de los planes. Tenía una competencia y control sobre todas las actuaciones y ramas del Estado⁸³. Por ello, la Sala lo consideró penalmente responsable como autor indirecto por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, en el sentido del art.25.3.a.ER. La primera orden de detención fue dictada el 4 de marzo de 2009, orden que no se pronunció sobre los cargos de crímenes de genocidio porque según la sentencia había “*un error en el criterio probatorio*”. Esto es que no había una relación razonable entre los materiales presentados por el fiscal y la presunción presentada.

La fiscalía ante esta decisión apeló la misma ante la SA el 13 de marzo de 2009. La fiscalía justificaba la existencia de los crímenes de genocidio por medio de presunciones, aclara que hay razones para pensar que hay una intención específica de destruir total o parcialmente a los Fur, Massalit y Zaghaw. Añade que “*en la etapa de la orden de detención no está obligado a presentar su argumentación completa, sino que solo debe satisfacer el criterio probatorio más bajo de los que establecen en el Estatuto*”⁸⁴. Desde el punto de vista del fiscal las pruebas presentadas dan “*motivos razonables*” para considerar la responsabilidad penal de Al Bashir.

La SA dictó que la SCP debería reconsiderar su postura, al creer que para la determinación de una orden detención la SCP no debe requerir “*un nivel de prueba*” exigida para la confirmación de los cargos. En segundo lugar, la certeza de la responsabilidad penal no debe ser clara dado que es una cuestión que será argumentada por el fiscal, solo es necesario que haya indicios. Por consiguiente, la SCP dictó una nueva orden de detención

⁸³ Extracto de la orden de detención pagina 8 : ...qu'Omar Al Bashir tenait un rôle qui dépassait la coordination de l'élaboration et de la mise en oeuvre du plan commun ; ii) qu'il avait le contrôle total de toutes les branches de « l'appareil d'État » du Soudan, notamment des Forces armées soudanaises et de leurs alliés des milices janjaouid, des forces de police soudanaises, du Service du renseignement et de la sécurité nationale et de la Commission d'aide humanitaire ; et iii) qu'il a utilisé ce contrôle pour assurer la mise en œuvre du plan commun.

⁸⁴ ICC-02/05-01/09 https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2010_05452.PDF

el 12 de julio de 2010, donde se le imputaban: 5 crímenes de lesa humanidad, 2 crímenes de guerra y 3 crímenes de genocidio.

3.3. La Tercera Causa: Bahr Idriss Abu Garda.

Se depositó el 20 de noviembre de 2008 ante la SCP, en este caso se dirigió contra líderes rebeldes responsables de crímenes de guerra por el ataque contra la base de la UA en Hakanita. El líder identificado fue Abu Garda perteneciente a la MJI, era presidente y coordinador general de las operaciones de la MJI. El ataque del que se le considera presuntamente responsable dejó 12 soldados muertos de la MUAS, 8 heridos gravemente, la MJI se apropió de materiales pertenecientes a la MUAS, destruyeron instalaciones y materiales. Ataque que también llegó a afectar a civiles. A diferencia de los otros presuntos responsables a Abu Garda se le remitió el 7 de mayo de 2009 una orden de comparecencia. Orden fundada en la existencia de razones suficientes para considerarle responsable de 3 cargos de crímenes de guerra, en el sentido del artículo 25.3.a del ER. Se entregó voluntariamente el 18 de mayo de 2009.

La situación no avanzó más porque la SCP decidió el 8 de febrero de 2010 no confirmar los cargos al no constatar la existencia de indicios suficientes para el procesamiento. El fiscal depositó ante esta decisión el 16 mayo del mismo año un requerimiento ante dicha, la sala lo rechazó. Finalmente, el presidente de la CPI reasignó el caso a la SPII el 15 de marzo de 2012. Pero, el asunto es considerado como cerrado en tanto el fiscal no proporcione nuevos elementos.

VI. CONCLUSIONES

La CPI es una jurisdicción fruto de la voluntad colectiva de los Estados soberanos. Un hito relativamente importante. Una creación lenta debido a la falta de consenso entre los Estados y contexto de la guerra fría. A pesar de que su adopción no fue rápida ni fácil, finalmente con el depósito de los 60 instrumentos de ratificación la CPI entro en vigor en 2002. Un acuerdo importante para la historia, en donde se observa la cooperación entre los distintos Estados del globo, dejando atrás sus diferencias, algo que hoy en día es difícil de lograr.

La creación de la CPI fue un triunfo para la Comunidad Internacional a pesar de los detractores, una jurisdicción innovadora en ese entonces. Tras dieciséis años de funcionamiento, la CPI como toda institución, debe evolucionar con los cambios de la sociedad y adaptarse a las nuevas problemáticas internacionales. Esto es que hay algunas cuestiones que requieren un nuevo enfoque o ampliación. Este es el caso del ámbito de competencia material. Como se refleja la Corte hasta hace poco era competente para conocer de crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra. Con la reforma de Kampala ya era competente para conocer de los crímenes de agresión.

En la actualidad no solo estos crímenes son el foco de las miradas de la Comunidad Internacional, sino que han surgido algunos con gran fuerza, como es el caso de los delitos de narcotráfico o tráfico de estupefaciente. Delito relativamente importante porque cada minuto le cuesta la vida a una persona, sobre todo a jóvenes. Es un delito que ha pasado además a otro nivel al no ser solamente drogas naturales, sino que se añaden los químicos que generan graves consecuencias. Otros delitos que han tenido trascendencia son los

crímenes de terrorismo, crímenes perpetrados por ciertos grupos que aterrorizan no solamente individuos sino a toda la Comunidad Internacional.

La labor exhaustiva de la CPI contra la impunidad de los crímenes internacionales se ha visto ampliamente materializada respecto de los cometidos en el continente africano. Cuestión en la que profundizamos con el Caso Lubanga remitido a la Corte por el propio gobierno congoleño y con el Caso Darfur. En el caso Lubanga, se le acabó declarando culpable crímenes de guerra por el reclutamiento de niños menores de 15 años. Pero, la labor de la Corte merecía ir más del allá, esto es que, aunque fuera el primer caso no debía limitarse a este crimen. Siempre hubo indicios para poder imputarle los delitos de trato inhumanos y crueles y la esclavitud. Afirmación admitida por la Corte, pero que rechazó su inclusión al no estar en el escrito inicial del Fiscal, un argumento relativamente pobre en relación con los delitos.

El segundo más polémico al ser un caso del que conoce la Corte a pesar de que Sudán no es estado parte del ER y por el hecho de que, por vez primera, un Jefe de Estado está siendo incriminado. Esta incriminación es novedosa al ver que los mecanismos de la CPI se ponen en marcha sin importar la autoridad del culpable. Pero, también es símbolo de fracaso al ver que este tribunal no está eficaz como se presentaba. Ello se debe a que además de Al Bashir, los otros dos solicitados por la CPI aún siguen sin presentarse ante la Corte y lo peor que desempeñan cargos importantes en Sudán. Incluso ha habido Estados africanos miembros de la CPI que no procedieron a su prestación cuando Al Bashir acudió a sus países, es el caso de Sudáfrica.

Esta actuación de la CPI ha generado la desconfianza de la mayor parte de estos estados africanos y la propia UA, que se han visto amenazados y ante una “caza de brujas”. Por un lado, la Corte solo está haciendo su labor como jurisdicción internacional permanente e imparcial. Una cuestión que es imputable a los propios estados africanos que desde un primer momento defendieron la creación de la Corte y que procedieron a una rápida ratificación del ER. Una participación intensa entendible a mi parecer por el hecho de que eran relativamente nuevos estados surgidos después de la descolonización, que buscaban adaptarse y ser aceptados por occidente. Como exponía la intervención de la CPI es totalmente justificada debido a:

- La comisión masiva de crímenes internacionales en el continente africano.
- La existencia de un gran número de víctimas que exigen la reparación por los daños cometidos, una forma de defender a la población civil afectada por estos delitos que muchas veces, por el hecho de que sean analfabetos, no pueden o no conocen sus derechos como seres humanos.
- El fracaso de las jurisdicciones nacionales que o bien reenvían la cuestión a la Corte o la propia Corte puede denominarse competente por el hecho de que el país en cuestión haya aceptado su competencia. Esta inactividad de los Estados puede deberse a dos factores: o bien por la falta de capacidad o bien por la falta de voluntad del Estado en cuestión para enjuiciar estos delitos.
- Las formas de reenvío de los hechos también cuentan: los propios estados africanos son los que, con su intensa cooperación, denunciaron delitos ante la CPI, e incluso con esta cooperación intensa se han generado detenciones, participando en las investigaciones; o el reenvío posible por el CSNU, aunque el Estado no es parte del ER

Por otro lado, es totalmente comprensible el sentimiento por parte de estos estados. Esto es que, no solo se cometen crímenes en África, sino que hay otros sitios en el globo que

merecen un interés por parte de la Corte. Pero hoy en día nos encontramos ante una comunidad internacional, que ha perdido los valores que propiciaron la aparición de no solo la CPI, sino de organismos internacionales que luchaban por la paz y la seguridad internacional de las personas. En la actualidad ya no es el interés colectivo que prima, sino más bien los intereses individuales.

VII. BIBLOGRAFÍA

1. MONOGRAFÍAS

- D. BERNARD y D. SCALIA (Dir.). *Vingt ans de justice internationale penale*. París. Editorial la Charte, 2015.
- Didier REBUT. *Droit penal internacional*, París. Editorial Dalloz, 2015
- Gréciano PHILIPPE et Bassiouni M. CHERIF, *Justice Pénale Internationale, les nouveaux enjeux de Nuremberg à L'Haya*, París. Editorial mare & Martin, 2016
- Herve ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET (Dirs.). *Droit International Pénal*, París. Editorial Cedin, 2012.
- Mohamed MADI DJABAKATE *Le rôle de la cour pénale internationale en Afrique*, París, Editorial l'Harmattan, 2014.
- Rafaëlle MAISON. *Justice penale internationale*, París. Editorial Puf, 2017
- William BOURDON, Emmanuelle DUVERGER et Robert BADINTER *La Cour Pénale Internationale, Le Statut de Rome*, París, Inédit Essais, 2000

2. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y OBRAS COLECTIVAS

- Mémoire réalisée par Annick SCHROBILTGEN. « La justice internationale penale hier. Aujourd'hui. Demain. » https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/en/object/thesis:3425/datastream/PDF_01/view
- Julian FERNÁNDEZ « L'expérience mitigée des tribunaux pénaux internationaux les limites de la justice pénale internationale ». *Annuaire français de relations internationales (AFRI)*. Volumen IX, 2008. http://www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2009/12/14_Fernandez_TPL.pdf
- La Federación Internacional de Derechos Humanos. "CPI los primeros años de la corte penal internacional". N° 516; marzo 2009-Diciembre 2009 <https://www.fidh.org/IMG/pdf/NoteCPI516esp2009-2.pdf>
- Marcelo TOURINO. "La corte penal internacional y los desafíos que la acechan un estudio crítico de su actuación a diez años de su puesta en funcionamiento". *Open Knowledge Network Collection*, 2012. <https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/Tourinoformatted.pdf>
- Augusto HERNÁNDEZ CAMPOS. "La Corte Penal Internacional: fundamentos y características". *Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho*, ISSN 0251-3420, ISSN-e 2305-2546, N°. 55, 2002, págs. 437-517 <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5084979.pdf>
- Jaime Alberto SANDOVAL MESA. "El desarrollo. de la competencia internacional. primeros aportes desde Núremberg y Tokio". *Revista Prolegómenos - Derechos y Valores* - pp. 35 - 55, 2012 – I <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4278169.pdf>
- José Manuel DÍAZ SOTO. "Una aproximación al concepto de crímenes contra la humanidad". *Derecho Penal y Criminología*, ISSN 0121-0483, ISSN-e 2346-2108, Vol. 33, N°. 95, 2012, págs. 119-151 <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4262525.pdf>
- Reynald OTTENHOF. « L'association internationale de droit pénal et la création de la cour pénale internationale : de l'utopie à la réalité ». *Revue internationale de droit pénal* 2002/1 (Vol. 73), págs 12-21. <https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2002-1-page-15.htm>
- Juli MINOVES-TRIQUILL. "ONG y pequeños estados en el establecimiento y consolidación de la CPI". *Revista CIDOB d'Afers Internacionals* n.101, p. 177-193 https://www.cidob.org/content/download/58768/.../177-194_JULI%20MINOVES.pdf
- Victor José ANAYA LÓPEZ. África y la corte penal internacional: logros y desafíos. las situaciones de Darfur, Kenia y Libia <http://www.observatoriodeconflictos.uma.es/wp-content/uploads/2015/07/tfgva.pdf>
- Jordi PALOU-LOVERDOS. "La encrucijada de la Justicia Penal Nacional e Internacional y la construcción de la paz: Aproximación transversal sobre derechos humanos, crímenes internacionales, peace building y reconciliación en África". *Publicacions digitals de l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València*. https://www.uv.es/drets/e-Studi_Palou-Loverdos.pdf
- Jeannette IRIGOIN BARRENNE. "El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas". *Revista Chilena de Derecho Número especial*, pp. 395-400 (1998)
- Xabier IRUJO. "Genocidio". *Hermes: pentsamendu eta historia aldizkaria = revista de*

- pensamiento e historia*, ISSN 1578-0058, N°. 52, 2016 (Ejemplar dedicado a: Memoria bizirik), págs. 22-28. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5698120.pdf>
- Jorge OSPITIA GARZON. “Crímenes de guerra y conflicto armado interno”. *Derecho Penal y Criminología*, ISSN 0121-0483, ISSN-e 2346-2108, Vol. 27, N°. 81, 2006 (Ejemplar dedicado a: Memorias. XXVIII Jornadas Internacionales de Derecho Penal: Derecho Penal Supranacional), págs. 119-134. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3308839>
 - Alfredo LIÑAN LAFUENTE. “Crímenes de Guerra”. *Economía. Revista en Cultura de la legalidad*. ISSN 2253-6655. N° 11, octubre 2016-marzo 2017, págs. 264-272. <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/3292/1968>
 - David SCHEFFER. “El significado y la activación del crimen de agresión bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”. *Política criminal*. Vol. 7, N° 13 (Julio 2012), Art. 6, pp. 209 – 229 http://www.politicacriminal.cl/Vol_07/n_13/Vol7N13A6.pdf
 - José Manuel DÍAZ SOTO. “Una aproximación al crimen internacional de agresión”. *Derecho Penal y Criminología*, ISSN 0121-0483, ISSN-e 2346-2108, Vol. 35, N°. 99, 2014. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5319712>
 - Víctor RODRÍGUEZ CEDEÑO, Juan Nicolás GUERRERO PENICHE. “Contribución al estudio de la competencia de la Corte Penal Internacional y su ejercicio”. *Derecho Penal y Criminología*, ISSN 0121-0483, ISSN-e 2346-2108, Vol. 21, N°. 69, 2000, págs. 77-114 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5319418>
 - Juan SOROETA. “La Corte Penal Internacional (2002-2017): Balance y perspectivas”, *Instituto Español de Estudios Estratégicos* http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2018/DIEEEINV19-2017_Corte_Penal_Int_2002-2017_Soroeta.pdf
 - Juan Jorge PIERNAS LÓPEZ. “La Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma”. *Anuario español de derecho internacional*, vol. 26, 2010, pág 285-302. <https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/anuario-esp-dcho-internacional/article/viewFile/4176/3568>
 - Philippe KIRSCH. « La Cour Penale Internationale, de Rome à Kampala ». *Annuaire français de relations internationales (AFRI)*, Volume XII, 2011. http://www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2015/03/8-Article_Kirsch.pdf
 - Carmen QUESADA ALCALA. “El crimen de agresión como amenaza a la seguridad global”. *Cuadernos de estrategia*, ISSN 1697-6924, N°. 160, 2013 (Ejemplar dedicado a: La respuesta del derecho internacional a los problemas actuales de la seguridad global), págs. 77-116 <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4173314.pdf>
 - Alicia GIL GIL. “Los crímenes contra la humanidad y el genocidio en el estatuto de la corte penal internacional”. *La nueva justicia penal internacional: desarrollos post-Roma*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002 <http://www.cienciaspenales.net/files/2016/10/1loscrimenescontralahumanidadyelgenocidio.pdf>
 - Carlos CERDA DUEÑAS. “Incidentes y riesgos de involución en la Corte Penal Internacional”. *Revista Criminalidad*, 59 (2): 125-138. <http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v59n2/1794-3108-crim-59-02-00125.pdf>
 - Laura BARNETT. “La Cour pénale internationale : histoire et rôle”. *Bibliothèque du Parlement, Ottawa (Canada, 2013)*. Publication n° 2002-11-F <https://bdp.parl.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2002-11-f.pdf>
 - AA.VV., “La corte penal internacional”. *Revista penal*, n°14 www.cienciaspenales.net/files/2016/10/5varios.pdf

3. DOCUMENTOS OFICIALES

- <https://www.icrc.org/fr/document/justice-penale-internationale-les-institutions>
- <http://unictr.unmict.org/fr/tribunal>
- <http://www.un.org/es/aboutun/structure/ilc.shtml>
- <http://www.icty.org/fr>
- <http://www.unmict.org/fr>

- <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdl82.htm>
- <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1993-statute-tribunal-former-yugoslavia-5tdm74.htm>
- <http://www.coalitionfortheicc.org/es/sobre-la-coalicion>
- <http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/>
- www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1426
- https://asp.icccpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/Pages/states%20parties%20%20chronological%20list.aspx
- <https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhhe.htm>
- https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/15_fernandez_de_gurmendi.pdf
- http://www.iccnw.org/documents/CICC_PreguntasYRespuestas_CPI_jul2012_SP.pdf
- http://www.iccnw.org/documents/Rapport_Commission_IONU_Darfour.pdf
- https://www.unicef.org/infobycountry/sudan_darfuroverview.html
- <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2004/18>
- [http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1574%20\(2004\)](http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1574%20(2004))
- [http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1547%20\(2004\)](http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1547%20(2004))
- [http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1564%20\(2004\)](http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1564%20(2004))
- [http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1556%20\(2004\)](http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1556%20(2004))
- https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/C6FE9E52-4845-41BA-A45D-75BA41D8647C/280449/9th_UNSCReport_Fra1.pdf
- https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05532.PDF
- https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_02905.PDF
- https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_02911.PDF
- https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009_03702.PDF
- https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2010_01409.PDF
- https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/upo/profesores/gferarr/profesor/1443183479194_las_dificultades_de_la_cpi_para_el_enjuiciamiento_de_jefes_de_estado.pdf
- <http://cdi.ulb.ac.be/wp-content/uploads/2012/12/RBDI.pdf>
- [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1547%20\(2004\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1547%20(2004))
- https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2010_05452.PDF
- <http://www.peaceau.org/uploads/communiquefr.pdf>
- https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_03627.PDF

- https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009_04174.PDF
- https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_06396.PDF
- https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2010_06097.PDF
- https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_02761.PDF
- https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_08207.PDF
- https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_08206.PDF
- https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2013_01508.PDF

ANEXO I

ESTADO DE RATIFICACIÓN DE LA REFORMA DE KAMPALA

NÚMERO DE ESTADOS	ESTADOS	FECHA DE RATIFICACION
1	Alemania	3.06.2013
2	Andorra	26.09.2013
3	Argentina	28.04. 2017
4	Austria	17.07.2014
5	Bélgica	26.11.2013
6	Bosnia	4.0.6.2013
7	Chile	23.09.2016
8	Chipre	25.09.2013
9	Costa Rica	5.02.2015
10	Croacia	20.12.2013
11	El Salvador	3.03.2016
12	España	25.09.2014
13	Estonia	27.03. 2013
14	Estado de Palestina	26.06.2016
15	Macedonia	1.03.2016
16	Finlandia	30.12.2015
17	Georgia	5.12.2014
18	Islandia	17.06.2016
19	Letonia	25.09.2014
20	Liechtenstein	8.03.2012
21	Lituania	7.12.2015
22	Luxemburgo	15.01.2013
23	Malta	30.01.2015
24	Panamá	6.12.2017
25	Países Bajos	23.09.2016
26	Polonia	25.09.2014
27	Portugal	11.04.2017
28	Republica Checa	12.03.2015
29	San Marino	14.11.2014
30	Samoa	25.09.2012
31	Eslovaquia	28.04.2014
32	Eslovenia	25.09.2013
33	Suiza	10.09.2015

34	Trinidad y Tobago	13.11.2012
35	Uruguay	26.09.2013

(Fuente: elaboración propia)

ANEXO II

SITUACIÓN DE LOS CASOS DE LOS QUE CONOCE LA CPI

CASO ANTE LA CPI	LEGITIMACIÓN PASIVA	CRÍMENES	FASE DEL PROCEDIMIENTO
Darfur, Sudán	Abu Garda	3 crímenes de guerra	Cerrado
Darfur, Sudán	Al Bashir	2 crímenes de guerra, 5 contra la humanidad y tres crímenes de genocidio	Preliminar
República de Mali	Al Hassan	Crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad	Preliminar
República de Mali	Al Mahdi	Crímenes de guerra	Reparación/ compensación
Libia	Al Werfalli	Crímenes de guerra	Preliminar
Darfur, Sudán	Banda	3 crímenes de guerra	En proceso
República de Kenia	Barasa		Preliminar
República Centroafricana	Jean Pierre Bemba Gombo	2 crímenes contra la humanidad y 3 de guerra	Cerrado

República Centroafricana	5 acusados	Atentado contra la justicia (falso testimonio) relacionado con el caso Jean Pierre Bemba	Recurso
Libia	Saif Al-Islam Qaddafi	2 crímenes contra la humanidad	Preliminar
Costa de Marfil	Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé	4 crímenes contra la humanidad	En proceso
República de Kenia	Paul Gicheru y Philip Kipkoech Bett		Preliminar
Darfur, Sudán	Ahmad Muhammad Harun	20 crímenes contra la humanidad y 22 de guerra	Preliminar
Darfur, Sudán	Ali Muhammad Ali Abd-Al- Rahman	22 crímenes contra la humanidad y 28 de guerra	Preliminar
Darfur, Sudán	Abdel Raheem Muhammad Hussein	7 crímenes contra la humanidad y 6 de guerra	Preliminar
República Democrática del Congo	Germain Katanga	4 crímenes de guerra y contra la humanidad	Reparación/ Compensación
República de Kenia	Uhuru Muigai Kenyatta	5 crímenes contra la humanidad	Cerrado
Libia	Al-Tuhamy Mohammed Khaled	3 crímenes contra humanidad y tres de guerra	Preliminar
Uganda	Kony, Raska Lukwiya		Preliminar

República Democrática del Congo	Thomas Lubanga Dyilo	Crímenes de Guerra	Reparación/Compensación
República Democrática del Congo	Calliste Mbarushimana	Crímenes de Guerra y contra la humanidad	Cerrado
República Democrática del Congo	Sylvestre Mudacumura	9 crímenes de guerra	Preliminar
República Democrática del Congo	Mathieu Ngudjolo Chui	Crímenes de guerra y contra la humanidad	Cerrado
República Democrática del Congo	Bosco Ntaganda	13 crímenes de guerra y 5 contra la humanidad	En proceso
Uganda	Dominic Ongwen	Crímenes de guerra y la humanidad	En proceso
República Democrática del Congo	William Samoei Ruto y Joshua Arap Sang	3 crímenes contra la humanidad	Cerrado
República de Costa de Marfil	Simone Gbagbo		Preliminar

(Fuente: elaboración propia)